

REGISTRO OFICIAL[®]

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUMARIO:

Págs.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

SENTENCIAS:

7-23-IS/25 En el Caso No. 7-23-IS Se acepta parcialmente la acción de incumplimiento No. 7-23-IS.....	2
72-23-IS/25 En el Caso No. 72-23-IS Se acepta la acción de incumplimiento No. 72-23-IS.	17
147-24-IS/25 En el Caso No. 147-24-IS Se desestima la acción de incumplimiento No. 147-24-IS.....	34
131-24-IS/25 En el Caso No. 131-24-IS Se desestima la acción de incumplimiento No. 131-24-IS.....	41
1-23-IS/25 En el Caso No. 1-23-IS Se desestima la acción de incumplimiento No. 1-23-IS	54
62-24-IS/25 En el Caso No. 62-24-IS Se desestima por improcedente la acción de incumplimiento No. 62-24-IS.	65
159-24-IS/25 En el Caso No. 159-24-IS Se desestima la acción de incumplimiento No. 159-24-IS.....	72



Sentencia 7-23-IS/25
Juez ponente: Richard Ortiz Ortiz

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2025

CASO 7-23-IS

**EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
 EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
 EMITE LA SIGUIENTE**

SENTENCIA 7-23-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional acepta parcialmente la acción de incumplimiento presentada en contra de la sentencia de 18 de mayo de 2022 dictada por la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva del cantón Loja, provincia de Loja. Esta Corte verifica que Banecuador incumplió con una de las medidas de reparación que ordenaba la presentación de un informe a la Unidad Judicial sobre el cumplimiento de la decisión.

1. Antecedentes procesales

1.1. Proceso acción de protección de origen

1. El 18 de marzo de 2022, Nuvia Anabel Lapo Garrido (“**accionante**”) presentó una acción de protección en contra de BANECUADOR (“**Banecuador**”) y de la Procuraduría General del Estado (“**PGE**”). En su demanda, solicitó se deje sin efecto el memorando que le notificó con la terminación de su contrato bajo la modalidad de servicios ocasionales.¹
2. El 18 de mayo de 2022, la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva

¹ Proceso 11571-2022-00210. La accionante señaló que, el 15 de junio de 2019, ingresó a trabajar en Banecuador bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, para el cargo de oficial de negocios junior. Además, indicó que el 28 de diciembre de 2021, mediante memorando BANECUADOR-SGN-2021-0336-MEM, fue notificada con la desvinculación de su puesto de trabajo, y con esta actuación se habrían vulnerado sus derechos al debido proceso en la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes; a la seguridad jurídica; al trabajo; y, al debido proceso en la garantía de la motivación. Arguyó que “habiendo superado el tiempo de un año de contratación ocasional fui desvinculada, arbitrariamente, luego de haberse entendido mi contratación como permanente”, al amparo del artículo 58 número 12 de la Ley Orgánica del Servicio Público (“**LOSEP**”). Finalmente, como pretensión solicitó: i) declarar que el memorando impugnado violentó “el derecho a la motivación, debido proceso, defensa, seguridad jurídica, y trabajo”; ii) el reintegro al puesto de trabajo; y, iii) el pago de remuneraciones dejadas de percibir.

del cantón Loja, provincia de Loja (**“Unidad Judicial”**) aceptó la acción.² Banecuator y la PGE interpusieron recurso de apelación.

3. El 21 de septiembre de 2022, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja (**“Corte Provincial”**) rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia subida en grado. Sin embargo, dispuso que el pago de remuneraciones se realizará desde la presentación de la demanda y no desde el momento de la desvinculación de la accionante.³
4. El 13 de octubre de 2022, Banecuator presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la decisión de 21 de septiembre de 2022, emitida por la Corte Provincial. El 16 de diciembre de 2022, el Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió la demanda presentada por Banecuator.⁴

1.2. Proceso de ejecución

5. El 7 de octubre de 2022, la accionante solicitó a la Unidad Judicial que se disponga a Banecuator el cumplimiento del reintegro a sus funciones y que se remita copias certificadas del expediente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo para el cálculo de la reparación económica.
6. El 26 de octubre de 2022, la accionante solicitó a la Unidad Judicial que, en el plazo de tres días, ordene a Banecuator la entrega de la acción de personal para el reintegro a sus funciones. El 31 de octubre de 2022, la Unidad Judicial ordenó a Banecuator el cumplimiento inmediato de la sentencia de 18 de mayo de 2022.

² La Unidad Judicial determinó que notificar “después de 2 años seis meses la terminación del Contrato de Servicios Ocasionales mantenido entre la Institución accionada y la accionante, sin haber realizado las acciones inherentes” conforme lo señala el artículo 58 de la LOSEP, vulneró los derechos constitucionales del accionante. En este sentido, Banecuator no actuó conforme a la ley. También, verificó que la prueba aportada por Banecuator no logró desvirtuar lo aseverado por la accionante en su demanda. Por estos motivos, declaró la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica; debido proceso; motivación y al trabajo. Como medidas de reparación dispuso: i) el reintegro de la accionante al puesto que desempeñaba, “hasta que se lleve a efecto el concurso de méritos y oposición”; ii) el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los beneficios de ley, “desde el momento mismo que fue separada, esto es desde el 31 de diciembre”. De igual manera, dispuso encargar a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia y que se informe a la Unidad Judicial. Además, dispuso a Banecuator remitir un informe a la Unidad Judicial sobre el cumplimiento de la decisión, el cual “deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta sentencia”.

³ La Corte Provincial señaló que la “suscripción de contratos ocasionales sucesivos e ininterrumpidos más allá de lo dispuesto en la normativa legal pertinente, equivale a la desnaturalización del contrato de trabajo de modalidad ocasional en el servicio público”.

⁴ Caso 2861-22-EP. El Tribunal de Admisión estuvo conformado por los jueces constitucionales Alí Lozada Prado y Richard Ortiz Ortiz, y el entonces juez constitucional Enrique Herrera Bonnet.

7. El 2 de diciembre de 2022, la accionante solicitó que se remita el informe de incumplimiento de sentencia a la Corte Constitucional y que se envíe una copia del proceso a la Fiscalía General del Estado.⁵
8. El 6 de diciembre de 2022, la Unidad Judicial dispuso a la Defensoría del Pueblo que, en el término de 72 horas, informe sobre las acciones realizadas por Banecuator para garantizar el cumplimiento de la sentencia. El 15 de diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo remitió copia del oficio enviado a Banecuator.⁶
9. El 20 de diciembre de 2022, la accionante señaló que no se ha dado cumplimiento con la sentencia constitucional y, en virtud de aquello, solicitó que la Unidad Judicial remita el informe de incumplimiento a la Corte Constitucional “a fin de que este organismo pueda dictar medidas de ejecución adecuadas para el cumplimiento de la sentencia”.⁷
10. El 5 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo presentó el informe solicitado por la Unidad Judicial.⁸ En la misma fecha, sobre la petición de 20 de diciembre de 2022, la Unidad Judicial señaló que “el mismo por el momento no se atiende en razón” del informe presentado por la Defensoría del Pueblo, puesto que la accionante sería reingresada a su lugar de trabajo en la fecha que indicaba el mencionado informe.
11. El 18 de enero de 2023, la accionante indicó que “a pesar que me encuentro ganando un sueldo, por orden del superior; sin embargo, la desidia del demandado, no me permite trabajar, para devengar mi salario que debe ser pagado”. Por lo expuesto, solicitó:
 - a) Considerando que, por orden del superior me encuentro ganando un suelo [sic], pero el demandado no permite que trabaje, este ultimo [sic] le estaría generando un perjuicio al estado, para lo cual remítase oficio, adjuntando copias del proceso, a partir de la sentencia, a la Contraloría General del Estado, disponiendo un examen especial.

⁵ En particular, la accionante señaló: “Llevamos mas [sic] de dos meses, esperando la voluntad de la entidad demandada para que cumpla la sentencia, y no ocurre”. Por ello, indicó que este retardo buscaba “burlar el cumplimiento de la sentencia”.

⁶ La Defensoría del Pueblo indicó que “procede a dar seguimiento al cumplimiento de sentencia” y solicitó a Banecuator que presente “un informe detallado sobre las acciones tomadas para el cumplimiento de la sentencia en referencia, el cual deberá ser remitido en el plazo de 15 días contados desde su notificación”.

⁷ La accionante cuestionó que la Defensoría del Pueblo haya otorgado un plazo adicional a Banecuator para garantizar el cumplimiento. Por ello, indicó que esta actuación “tiene como consecuencia que no pueda ingresar a trabajar, aún”. Además, especificó que han transcurrido siete meses sin que la decisión se haya cumplido.

⁸ La Defensoría del Pueblo manifestó que se realizó una visita *in situ* donde se informó que Banecuator se encontraba a la espera de la orden de talento humano para “que la [accionante] señora Nuvia Lapo Garrido sea reingresada a su trabajo, ingreso que se realizará el día lunes 09 de enero de 2023”.

b) Ante el reiterado incumplimiento del demandado, remítase un informe de incumplimiento a la CC.

12. En la misma fecha, la Unidad Judicial, a petición de la accionante, remitió el expediente y su informe ante la Corte Constitucional.
13. El 20 de enero de 2023, Banecuator ingresó un escrito mediante el cual informó sobre las actuaciones realizadas para incorporar nuevamente a la accionante a su puesto de trabajo. En dicho documento, manifestó que “la institución está realizando las gestiones tendientes al cumplimiento de la sentencia; sin embargo, es necesario señalar que dependemos de la aprobación del presupuesto del año 2023 conforme [ha informado el área de Control Financiero y Presupuestario]”.⁹
14. El 24 de febrero de 2023, la accionante indicó a la Unidad Judicial que “finalmente la entidad demandada ha dado paso a mi reintegro de funciones, a partir del día 22 de febrero de 2023”.
15. El 22 de marzo de 2023, la Unidad Judicial dispuso oficiar al Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo y Tributario de Loja (“TDCA”) para “hacer efectiva [la] reparación económica conforme lo determina el Art. 19 de la [LOGJCC]”.
16. El 15 de junio de 2023, la Unidad Judicial aceptó y agregó al expediente los autos del proceso de reparación económica emitidos por el TDCA.
17. El 11 de julio de 2023, la Unidad Judicial dispuso que Banecuator transfiera “los valores consignados en los comprobantes contables N° 5502007 y 5502008, de fecha 06 de julio de 2023, a la cuenta de la Unidad Judicial”.¹⁰

⁹ Conforme a los documentos que adjuntó Banecuator, se desprende lo siguiente: 1) Con fecha 30 de septiembre de 2022, el Gerente de Sucursal Zonal remitió un informe al Gerente de Asesoría Jurídica “para cumplir la sentencia emitida dentro [de la acción de protección]; 2) Con fecha 27 de diciembre de 2022, el Gerente Financiero señaló que “no es posible efectuar una certificación presupuestaria para el año en curso, puesto que se encuentra en proceso de cierre”; 3) Con fecha 3 de enero de 2023, el Analista de Asesoría Jurídica y Patrocinio emitió al Gerente de Sucursal Zonal un memorando en el cual solicitó que se le informe “la fecha en la cual se procederá a [reintegrar] a la señora Nuvia Anabel Lapo Garrido”; 4) Con fecha 3 de enero de 2023, el Gerente de Sucursal Zonal señaló que el reintegro sería el 6 de enero de 2023, pero que aún no contaba con la certificación presupuestaria; 5) Con fecha 12 de enero de 2023, el Gerente de Sucursal Zonal solicitó la emisión de la respectiva certificación de disponibilidad de fondos; 6) Finalmente, con fecha 19 de enero de 2023, el Subgerente de Control Financiero y Presupuestario señaló que la proforma presupuestaria aún no se encontraba aprobada.

¹⁰ El número de comprobante 5502007 correspondió al monto de USD 12,110.91 por concepto de reparación económica a la accionante (USD 10,962.35) más los aportes personales al IESS (USD 1,148.56). Por su parte,

18. El 3 de agosto de 2023, la Unidad Judicial señaló que “se ha dado cumplimiento a lo dispuesto esto es que se ha procedido a transferir los valores por concepto de reparación integral y honorarios de perito, a la cuenta de esta unidad judicial, se debe de aclarar que las mismas ya fueron pagadas oportunamente a los beneficiarios”.

1.3. Procedimiento ante la Corte Constitucional

19. El 26 de enero de 2023, se realizó el sorteo de la causa y la sustanciación del caso le correspondió al juez constitucional Richard Ortiz Ortiz. El 29 de agosto de 2025, el juez ponente avocó conocimiento de la causa y dispuso que tanto la accionante como Banecuador se pronuncien sobre el presunto incumplimiento de las medidas ordenadas en sentencia. Por otro lado, ordenó que la Unidad Judicial presente un informe de descargo actualizado.
20. El 5 de septiembre de 2025, Banecuador presentó el informe requerido. El 12 de septiembre de 2025, la Unidad Judicial remitió su informe de descargo actualizado.

2. Competencia

21. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones de incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales de conformidad con el artículo 436 número 9 de la Constitución de la República y los artículos 162 al 165 de la LOGJCC.

3. Decisión judicial cuyo cumplimiento se cuestiona

22. La sentencia de la Unidad Judicial de 18 de mayo de 2022, dispuso:

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA [sic], RESUELVE: 1) Declarar que los accionados han violado a la accionante los derechos contenido [sic] en los Arts. 82, 76.7 L) y 33 de la Constitución que se refieren a la Seguridad Jurídica, Debido proceso, Motivación y al Trabajo. 2) Por lo tanto se dispone que BANEQUADOR B.P., en la persona del señor doctor William Fernando Chiang Espinosa, o de quien lo subrogué, reintegre de forma inmediata al puesto que venía desempeñando en dicha institución como OFICIAL DE NEGOCIOS JUNIOR hoy OFICIAL

el número de comprobante 5502008 correspondió al pago de los honorarios de la perito que realizó el cálculo de la reparación económica (USD 153.00).

JR. DE NEGOCIOS, a la señora NUVIA ANABEL LAPO GARRIDO, hasta que se lleve a efecto el concurso de méritos y oposición de dicho cargo en los términos del Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 2) [sic] Que se le cancele las remuneraciones dejadas de percibir y los beneficios de Ley, desde el momento mismo que fue separada, esto es desde el 31 de diciembre del año. 4) Encargar a la Delegación de la Defensoría del Pueblo a fin de que haga un seguimiento al cumplimiento de la presente sentencia y se mantenga informado a este Juzgado hasta su total cumplimiento, pudiendo ejercer las acciones necesarias para lograr dicho fin, debiéndose para el efecto oficiarse a la Defensoría del Pueblo. El accionado deberá rendir un informe al Juzgado sobre el cumplimiento del fallo. Este informe deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta sentencia.¹¹

4. Argumentos de los sujetos procesales

4.1. Argumentos de la Unidad Judicial ejecutora

23. En su informe de 18 de enero de 2023, la Unidad Judicial se centró en realizar un recuento de las actuaciones procesales con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia de 18 de mayo de 2022. Finalmente, indicó que remitió el expediente para que esta Magistratura se encargue de determinar el cumplimiento o incumplimiento de la decisión constitucional.
24. En su informe de descargo actualizado de 12 de septiembre de 2025, la Unidad Judicial indicó que Banecuador “ha cumplido de manera íntegra” con la decisión judicial de 18 de mayo de 2022, puesto que se cumplió con el reintegro de la accionante y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.¹²

4.2. Argumentos de la accionante

25. En su escrito de 20 de diciembre de 2022, la accionante señaló que, tras siete meses de la emisión de la decisión judicial, no se cumplió con la misma. Por ello, solicitó a la Unidad Judicial que remita el informe correspondiente a este Organismo.

4.3. Argumentos de Banecuador

26. En su informe de 5 de septiembre de 2025, Banecuador detalló las actuaciones administrativas llevadas a cabo para dar cumplimiento con el reintegro de la accionante.

¹¹ Esta Corte observa que la medida referente al pago de remuneraciones dejadas de percibir fue reformada por la Corte Provincial, así señaló que “se manda a cancelar a la accionante las remuneraciones dejadas de percibir y los beneficios de Ley, desde el momento en que se presentó esta demanda y no desde cuando fue separada”.

¹² Informe de descargo actualizado de 12 de septiembre de 2025, foja 21.

De esta forma resaltó que, conforme el memorando BANEQUADOR-GF-2022-1292-MEM, emitido por la gerencia financiera de Banecuador, la cual informó que “no es posible efectuar una certificación presupuestaria para el año en curso”.¹³ Por ello, indicó que informó a la Unidad Judicial que “al no existir la aprobación de la certificación presupuestaria para el año 2023, no era posible el reintegro de la ex servidora Nuvia Anabel Lapo Garrido”.¹⁴ Finalmente, arguyó que, una vez que se contó con certificación presupuestaria, se procedió a cumplir con el reintegro de la accionante¹⁵ y el pago de la reparación económica.¹⁶ En consecuencia, se dio cumplimiento de la decisión de 18 de mayo de 2022.

5. Cuestión previa

27. De conformidad con los artículos 163 y 164 de la LOGJCC, así como el 96 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional (“**RSPCCC**”), la ejecución de las sentencias y resoluciones constitucionales corresponde a los jueces constitucionales de primera instancia que conocieron el proceso de origen. Solo de forma **subsidiaria**,¹⁷ este Organismo puede asumir dicha competencia a través de una acción de incumplimiento.

28. Esta Magistratura observa que la acción de incumplimiento se presentó a petición de la parte afectada y ante el juez ejecutor. En la sentencia 226-22-IS/23, este Organismo determinó que, para poder ejercer la acción de incumplimiento a petición de la persona afectada, deben cumplirse los siguientes requisitos:

28.1. Impulso: La persona afectada debe promover el cumplimiento de la decisión ante el juez o jueza ejecutora, previo a ejercer la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Es decir, no puede requerir la remisión del expediente a la Corte de forma inmediata.

28.2. Requerimiento: La persona afectada debe solicitar al referido órgano jurisdiccional que remita el expediente a la Corte Constitucional junto con el

¹³ Memorando BANEQUADOR-GF-2022-1292-MEM ([Anexo 4](#)).

¹⁴ Escrito de 20 de enero de 2023 ([Anexo 6](#)).

¹⁵ Oficio BANEQUADOR-GZL-2023-0010-OF ([Anexo 7](#)).

¹⁶ Escrito de acreditación de reparación económica ([Anexo 11](#)).

¹⁷ CCE, sentencia 53-23-IS/24, 7 de marzo de 2024, párr. 16 y sentencia 90-22-IS/24, 21 de febrero de 2024, párr. 26.

correspondiente informe con los argumentos sobre las razones del incumplimiento alegado y justifique los impedimentos para ejecutar la decisión.

28.3. Plazo razonable: Dicho requerimiento de que se remita el expediente a este Organismo debe ser realizado una vez que haya transcurrido un plazo razonable para la ejecución de la decisión constitucional por parte del juez ejecutor.

29. Si no se cumple cualquiera de estos requisitos, la jurisprudencia de esta Corte establece que esto constituye razón suficiente para desestimar la acción, **puesto que no son subsanables**.¹⁸ En estos casos, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la acción ni analizar la actuación de la jueza o juez de instancia al que le corresponde ejecutar la decisión.¹⁹ Así las cosas, se procede a verificar lo siguiente:

29.1. Respecto del **impulso**, este Organismo verifica que la accionante promovió el cumplimiento de la sentencia activamente ante la Unidad Judicial (párrs. 5, 6 y 7 *supra*). Por lo cual, se observa que la accionante cumplió con este requisito.

29.2. En cuanto al **requerimiento**, de la revisión del expediente, esta Corte observa que la accionante el 2 de diciembre de 2022 y el 18 de enero de 2023 (párrs. 7 y 11 *supra*) solicitó a la Unidad Judicial que remita el expediente a la Corte Constitucional y que acompañe su informe motivado. Posteriormente, la Unidad Judicial remitió a esta Corte el informe y el expediente correspondiente. Por ende, se cumplió con el requisito analizado.

29.3. En relación con el **plazo razonable**, este Organismo verifica que la decisión fue emitida el 18 de mayo de 2022 y la solicitud de remitir el expediente a la Corte se presentó el 18 de enero de 2023. Es decir, transcurrió, aproximadamente ocho meses desde que se emitió la decisión constitucional. En atención a las medidas ordenadas en sentencia en conjunto con el impulso de la accionante, este Organismo encuentra que transcurrió un plazo razonable para el cumplimiento de la sentencia constitucional. En consecuencia, el requisito se encuentra satisfecho.

30. Por lo expuesto, en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia para la presentación de la acción de incumplimiento a petición de parte. Por lo tanto, este

¹⁸ CCE, sentencia 214-22-IS/23, 15 de diciembre de 2023, párr. 12.

¹⁹ CCE, sentencia 107-21-IS/24, 28 de febrero de 2024, párr. 51.

Organismo analizará el presunto incumplimiento de la decisión, a partir de la documentación que consta en el expediente procesal.

6. Planteamiento y resolución del problema jurídico

31. La accionante alegó que Banecuador no cumplió con las medidas ordenadas en sentencia. En particular, alegó que la entidad accionada no habría cumplido con el reintegro ni con el pago de haberes dejados de percibir. En virtud de lo expuesto, este Organismo plantea el siguiente problema jurídico:

6.1. ¿La entidad demandada –Banecuador– cumplió con las medidas ordenadas en la sentencia de 18 de mayo de 2022, emitida por la Unidad Judicial?

32. La Corte Constitucional ha señalado que el alcance de la acción de incumplimiento es proteger a las personas ante el incumplimiento total o parcial de las obligaciones concretas dispuestas en una decisión constitucional.²⁰ De tal manera, la atribución que ejerce la Corte Constitucional de conocer y sancionar el incumplimiento de sentencias constitucionales es una función medular para la protección de los derechos, toda vez que permite garantizar la ejecución y el cumplimiento integral de las decisiones emitidas en la materia.²¹
33. Ahora bien, esta Magistratura observa que la Unidad Judicial en la sentencia de 18 de mayo de 2022 (párr. 16 *supra*), y que fue modificada por la Corte Provincial respecto al cálculo de remuneraciones (párr. 3 *supra*), dispuso cuatro medidas de reparación que debían ser cumplidas: (i) reintegrar inmediatamente a la accionante al puesto de oficial junior de negocios, hasta que se lleve a cabo el concurso de méritos y oposición; (ii) cancelar las remuneraciones dejadas de percibir más los beneficios de ley, desde que la accionante presentó la demanda;²² (iii) presentar un informe a la Unidad Judicial sobre el cumplimiento de la decisión “dentro de los 15 días siguientes a notificación de esta sentencia”; y (iv) delegar a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, y que “se mantenga informado a este Juzgador hasta su total cumplimiento”.

²⁰ CCE, sentencia 2-19-IS/23, 18 de octubre de 2023, párr. 36 y sentencia 44-15-IS/20, 18 de noviembre de 2020, párr. 21.

²¹ CCE, sentencia 24-21-IS/24, 11 de enero de 2024, párr. 36 y sentencia 163-23-IS/24, 8 de noviembre de 2024, párr. 35.

²² La Corte Provincial reformó la sentencia de primera instancia. En su lugar, dispuso que el cálculo de la reparación económica se realice desde que la demanda se presentó, es decir, desde el 18 de marzo de 2022.

34. En relación con la medida **(iv)**, esta Corte no analizará el cumplimiento de esta medida porque no es una medida en sentido estricto, sino una competencia que tienen los juzgadores de delegar a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia de 18 de mayo de 2022, de conformidad con el artículo 21 de la LOGJCC.²³ Por lo que, esta Corte analizará si se cumplieron las medidas restantes: **(i)**, **(ii)** y **(iii)**.
35. Sobre la **medida (i)** que dispuso el **reintegro inmediato** de la accionante a las mismas funciones que venía realizando previo a su desvinculación, esta Corte observa que, con base en el certificado de trabajo, emitido por Banecuador, la accionante fue reintegrada a su puesto de trabajo “desde el 22 de febrero de 2023”.²⁴ Así también, se verifica que, el 24 de febrero de 2023, la accionante informó a la Unidad Judicial que había sido reintegrada a su lugar de trabajo.²⁵ Por lo tanto, esta Corte observa que la medida se encuentra cumplida.
36. Ahora bien, esta Corte también advierte que la sentencia dispuso que el reintegro se realice de forma inmediata. Sin embargo, la accionante fue reintegrada a su lugar de trabajo después de nueve meses de emitida la sentencia. Por ello, este Organismo analizará si se configuró un supuesto retardo en el cumplimiento de esta medida de reparación integral, puesto que las sentencias constitucionales deben cumplirse de forma inmediata o, de ser el caso, dentro del plazo establecido en ellas.
37. Este Organismo ha señalado que para se configure el cumplimiento defectuoso por tardío de una medida deberán concurrir dos elementos: **(1)** retardo en el cumplimiento; y, **(2)** falta de justificación para el retardo.²⁶ Al respecto, es preciso enfatizar que este Organismo ha reconocido que las medidas de reintegro suponen cierta complejidad.²⁷ De allí que, a pesar de que se verifica un retardo de nueve meses en el cumplimiento de la medida (1), aquella no podía ser cumplida de forma inmediata como lo dispuso la judicatura. En el presente caso, conforme a lo señalado en los párrafos 13 y 26 *supra*, Banecuador justificó el retardo en el cumplimiento de esta medida en el hecho de que no contaba con la certificación presupuestaria para dar cumplimiento a esta disposición después de varias insistencias administrativas (2). Por tanto, este Organismo declara el cumplimiento integral de esta medida de reparación, ya que Banecuador sí justificó el retardo.²⁸

²³ CCE, sentencia 127-21-IS/24, 21 de marzo de 2024, párr. 39.

²⁴ Certificado de trabajo ([Anexo 10](#)).

²⁵ En su escrito, la accionante alegó que fue reintegrada el 22 de febrero de 2023.

²⁶ CCE, sentencia 47-21-IS-24, 21 de marzo de 2024, párr.29; y, 127-21-IS/24, 21 de marzo de 2024, párr. 44.

²⁷ CCE, sentencia 67-23-IS/24, 21 de noviembre de 2024, párr. 28.

²⁸ La información es verificable conforme el certificado de trabajo ([Anexo 10](#)).

38. Respecto de la **medida (ii)** que dispuso el **pago de las remuneraciones** dejadas de percibir desde que la accionante presentó la demanda hasta su reintegro, de la revisión del sistema EXPEL, esta Corte verifica las siguientes actuaciones:

38.1. El 15 de marzo de 2023, la accionante solicitó a la Unidad Judicial que derive el caso al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (“**TDCA**”), para que cuantifique el pago de haberes dejados de percibir por la accionante.

38.2. El 5 de mayo de 2023, la accionante insistió que se remita el expediente al TDCA. En la misma fecha, la Unidad Judicial solicitó a la accionante retirar las copias y el oficio para que pueda ser derivado al TDCA.

38.3. El 7 de junio de 2023, el TDCA ordenó a Banecuador el pago de USD 13,414.54 en el término de **quince días**.²⁹ Este valor debía ser cancelado con el siguiente detalle: (i) la cantidad de USD 10,962.35, por concepto de reparación económica a favor de la accionante más los beneficios de ley; (ii) la cantidad de USD 2,317.19, por concepto de aportes al IESS; y, (iii) la cantidad de USD 135, por concepto de honorarios de la perito cuantificadora.

38.4. El 7 de julio de 2023, Banecuador solicitó a la Unidad Judicial “emitir la papeleta de depósito de la cuenta judicial y la papeleta de retiro respectiva”.³⁰

38.5. El 11 de julio de 2023, la Unidad Judicial ordenó a Banecuador que transfiera los valores a la cuenta de la Unidad Judicial. El 14 de julio de 2023, Banecuador transfirió el valor de USD 10,962.35³¹ y el valor de USD 153.³²

38.6. El 3 de agosto de 2023, la Unidad Judicial indicó que se cumplió con el pago de los valores “por concepto de reparación integral y honorarios de perito”.

39. De lo expuesto, esta Corte constata que Banecuador cumplió con la segunda medida de reparación; ya que, después del mandamiento de pago ordenado por el TDCA (7 de junio de 2023),³³ Banecuador consignó ese valor en un tiempo razonable (14 de julio de 2023),

²⁹ Proceso de cuantificación de reparación económica 11804-2023-00140.

³⁰ En el mismo escrito, Banecuador adjuntó los comprobantes contables 5502007 y 5502008 de 6 de julio de 2023.

³¹ Valor correspondiente al pago de reparación económica más beneficios de ley.

³² Valor correspondiente al pago del peritaje.

³³ La información es verificable conforme el escrito remitido por Banecuador ([Anexo 11](#)).

cuestión que fue informada a la Unidad Judicial.³⁴ En consecuencia, la medida **(ii)** se encuentra cumplida.

40. Sobre la **medida (iii)** que dispuso que Banecuador presente un informe a la Unidad Judicial sobre el cumplimiento de la sentencia dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la resolución judicial, de la revisión del expediente y del sistema EXPEL, esta Magistratura observa que Banecuador no remitió el informe solicitado por la Unidad Judicial en sentencia de 22 de marzo de 2022, en el plazo de quince días. Por ello, este Organismo declara el incumplimiento de esta medida.
41. Ante el incumplimiento de la medida **(iii)**, correspondería que este Organismo ordene que Banecuador cumpla con la medida. Sin embargo, se ha comprobado que todas las medidas dispuestas en sentencia han sido cumplidas. Y, dado que, esta medida buscaba verificar que todas las obligaciones dispuestas en sentencia de 18 de mayo de 2022 se cumplan, esta Corte no dispone el cumplimiento de esta medida. Por ello, en su lugar, se realiza un llamado de atención a Banecuador por su incumplimiento.
42. En virtud de lo expuesto, este Organismo verifica que Banecuador cumplió integralmente con el reintegro de la accionante a su puesto de trabajo; cumplió con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la presentación de la demanda hasta el reintegro de la accionante a su puesto de trabajo; no obstante, incumplió con remitir el informe a la Unidad Judicial.
43. Finalmente, este Organismo no puede dejar de observar que la jueza de instancia durante la ejecución de la sentencia se limitó a ordenar en una sola ocasión a Banecuador (párr. 6 *supra*) que cumpla con la sentencia de 18 de mayo de 2022 y se limitó a verificar los informes de seguimiento de la Defensoría del Pueblo sin realizar ninguna otra actuación. Esta única actuación realizada por la jueza ejecutora es insuficiente respecto a su obligación que, como órgano ejecutor, tiene para garantizar el cumplimiento integral de las sentencias constitucionales.
44. Al respecto, se recuerda que los jueces ejecutores cuentan con amplias facultadas para lograr el cumplimiento de sus sentencias, de conformidad con el artículo 21 de la LOGJCC. En la especie, este Organismo verifica que la jueza ejecutora no empleó todos los medios adecuados y pertinentes otorgados por la ley, para lograr el cumplimiento de las medidas ordenadas en sentencia.

³⁴ En escrito de 8 de septiembre de 2025, la accionante informó a la Unidad Judicial que “los valores por concepto de reparación me fueron cancelados y no tengo reclamo alguno sobre la ejecución del proceso”.

7. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. **Aceptar parcialmente** la acción de incumplimiento 7-23-IS.
2. **Declarar** el cumplimiento integral de la medida que ordenaba el reintegro de la accionante a su puesto de trabajo, y que fue dispuesta en la sentencia de 18 de mayo de 2022.
3. **Declarar** el cumplimiento integral de la medida que ordenaba cancelar las remuneraciones dejadas de percibir de la accionante, y que fue dispuesta en la sentencia de 18 de mayo de 2022.
4. **Declarar** el incumplimiento de la tercera medida ordenada en la sentencia de 18 de mayo de 2022 y, en su lugar, llamar la atención a Banecuador por no remitir el informe de cumplimiento a la Unidad Judicial.
5. **Disponer** la devolución del expediente al juzgado de origen y **archivar** el proceso de acción de protección de origen.
6. Notifíquese y archívese.



Firmado electrónicamente por:
**JHOEL MARLIN
ESCUDERO SOLIZ**

Validar únicamente con Firma@C

Jhoel Escudero Soliz
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, en sesión jurisdiccional extraordinaria de viernes 28 de noviembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente
Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI

723IS-879a0



Caso Nro. 7-23-IS

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en la sesión respectiva.- **Lo certifico.-**

Documento firmado electrónicamente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Sentencia 72-23-IS/25
Juez ponente: Jorge Benavides Ordóñez

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2025

CASO 72-23-IS

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA 72-23-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional acepta la acción de incumplimiento de una sentencia que admitió una acción de protección por haberse procedido a efectuar una expropiación sin determinación del pago del justo precio. Se ordena que las medidas de reparación se cumplan previa presentación de un cronograma y en un término desde la notificación de la presente sentencia.

1. Antecedentes procesales

1.1. Proceso originario

1. El 10 de febrero de 2022 Paúl Eduardo Roa López (**“Accionante”**) presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (**“Entidad accionada”**). El accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica y propiedad privada debido a la construcción de la carretera (paso lateral Santa Elena-Guayaquil), obra dispuesta por el Ministerio de Transporte y Obras Pública mediante Acuerdo Ministerial No.020-2020 y cuya ejecución estaba a cargo de la empresa Corredor Vial de la Costa CVIALCO. La mencionada obra según el accionante irrumpió un predio privado de su propiedad ubicado en la comuna “El Tambo”, sin previa notificación ni el pago de indemnización del precio justo por la declaratoria de utilidad pública. El proceso fue signado con el número 24201-2022-00154.
2. La Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia de Santa Elena (**“Unidad Judicial”**) dictó la sentencia de 13 de junio de 2022, y aceptó la acción de protección, en la misma, declaró la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso por la falta de notificación de la declaratoria de utilidad pública y la ausencia de pago de la justa indemnización y dispuso como medida de reparación la determinación del monto¹ y el pago de la indemnización, así

¹ La sentencia de la Unidad Judicial de 13 de junio de 2023 dispuso.
[...]Se ordena al señor Ministro de Obras Públicas y Transporte, que, en el plazo perentorio de treinta días, (30) cumpla con determinar el monto y el pago de la indemnización justa que por expropiación[...].

como, que la entidad accionada emita disculpas públicas y publique la sentencia a favor del accionante.²

3. La entidad accionada con fecha 16 de junio de 2022, interpuso un recurso de apelación, tras lo cual la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena (“**Sala Provincial**”), emitió sentencia el 19 de julio de 2022, en la que ratificó el fallo de primer nivel, con la reforma al numeral 1 de la mencionada decisión.³

1.2 Fase de Ejecución

4. En la fase de ejecución de la Unidad Judicial, constan distintas actuaciones del 05 de agosto de 2022 al 30 de diciembre de 2022 y se detallan a continuación:

El **5 de agosto de 2022**, el accionante pidió a la Unidad Judicial el cumplimiento de la sentencia del 13 de junio de 2022. El **8 de agosto de 2022**, la Unidad ordenó a la entidad accionada que en **30 días** determine el monto y pago de la indemnización justa por expropiación, así como medidas de reparación, a ejecutarse de común acuerdo en un plazo de seis meses. También dispuso la publicación de disculpas públicas en su página web durante 30 días. El **9 de agosto de 2022**, el accionante volvió a solicitar el cumplimiento de lo resuelto por la Sala Provincial. El **10 de agosto de 2022**, la Unidad reiteró la orden a la entidad demandada: en 30 días debía fijar el justo precio del predio afectado. El **7 de octubre de 2022**, el accionante pidió que se deje constancia del vencimiento del plazo y se apliquen sanciones por incumplimiento (art. 22 LOGJCC). El **12 de octubre de 2022**, la Unidad certificó que la entidad no había cumplido. El **13 de octubre de 2022**, el accionante reiteró la solicitud de sanción, y ese mismo día la Unidad concedió 5 días a la entidad para pronunciarse. El **26 de octubre de 2022**, la entidad accionada expresó su

²En la sentencia de primera instancia consta: [...]el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, privó del derecho de propiedad al señor Roa López Paúl Leonardo por razones de utilidad pública legítimas y debidamente fundamentadas[...]sin embargo, el Estado no respetó los requerimientos necesarios para restringir el derecho a la propiedad [...]el accionante no fue notificado en legal y debida forma sobre la declaratoria de utilidad pública que si fue notificada a los representantes de la Comuna El Tambo, lo que no le permitió participar en todo el proceso, sin que hasta la fecha el Ministerio haya hecho constar como al accionante como beneficiario de rubro alguno, por concepto del perjuicio ocasionado a un bien de su propiedad, los miembros de la comuna, a diferencia del accionante si llegaron a acuerdos respecto de la reparación que les correspondía por la ocupación de sus tierras comunales.[...]al dejar fuera del proceso de la declaratoria de utilidad pública al accionante merma su derecho [...] a la indemnización que por justo precio le corresponde, respecto del daño causado en un terreno de su propiedad [...].

³ En la sentencia de segunda instancia consta:[...]De oficio reforma la sentencia subida en grado de fecha lunes 13 de junio del 2022, las 17h36, en lo que respecta al numeral “1” de la Decisión, disponiendo que Ministro de Obras Públicas y Transporte, en el plazo de treinta días (30) contados a partir de la notificación de la sentencia cumpla con determinar el justo precio por concepto de expropiación de la predio de propiedad del Señor PAÚL LEONARDO ROA LÓPEZ, afectado por el Proyecto Vial denominado “Rehabilitación, Construcción de Obras Complementarias, Mantenimiento Rutinario y Periódico, Explotación y Operación del Sistema Vial, Chongón-Santa Elena (...) Corredor Arterial E-40 (...)” ubicado en las Provincias de Guayas y Santa Elena, dispuesto mediante Acuerdo Ministerial No.020-2020 emitido por el Econ. José Gabriel Martínez Castro Ministro de Transporte y Obras Públicas; sin perjuicio, que de común acuerdo entre los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el accionante señor Paúl Leonardo Roa López, convengan el precio [...].

“voluntad de cumplir”, pero señaló que el accionante debía entregar documentación exigida por el Reglamento del Sistema de Infraestructura Vial. Ese mismo día, la Unidad trasladó esa solicitud al accionante. El **23 de noviembre de 2022**, el accionante informó haber entregado toda la documentación y solicitó nuevamente la ejecución. El 1 de diciembre de 2022, la entidad indicó que remitió los documentos al departamento encargado para continuar con el trámite de pago. El **9 de diciembre de 2022**, el accionante pidió nuevamente el cumplimiento y solicitó que se sienta un precedente sancionatorio por incumplimiento. El **13 de diciembre de 2022**, la Unidad corrió traslado a la entidad para que responda en 5 días. El **20 de diciembre de 2022**, la entidad reiteró su “voluntad de cumplir”, pero alegó que el pago dependía de directrices del Ministerio de Economía y del **cierre** del año fiscal, lo cual constituía una supuesta fuerza mayor. Propuso designar un perito del Consejo de la Judicatura para el avalúo. El **22 de diciembre de 2022**, la Unidad puso en conocimiento del accionante esta respuesta. El **23 de diciembre de 2022**, el accionante insistió en la ejecución, rechazó la pericia propuesta y reiteró la solicitud de sanción. El **30 de diciembre de 2022**, la Unidad Judicial delegó a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, otorgándole 10 días para emitir un informe. También ordenó a la entidad accionada que, en igual plazo, presente un informe detallando las acciones realizadas para ejecutar la sentencia, especialmente la determinación y pago del precio justo, indicando que el plazo concedido había sido ampliamente superado. (resaltado fuera del texto)

5. La Unidad Judicial continuó con la ejecución de la sentencia, constando diversas actuaciones del 13 de enero al 26 de abril de 2023:

El **13 de enero de 2023**, la entidad accionada presentó evidencias de la publicación de las disculpas públicas ordenadas en la sentencia del 13 de junio de 2022 (link y captura) y adjuntó la hoja de ruta del Memorando MTOP-DDG-2022-2765-ME. Indicó que la documentación estaba en análisis para proceder al **pago** y reiteró su “voluntad de cumplimiento”, señalando que esperaban la habilitación del sistema de pagos. El **24 de enero de 2023**, la Defensoría del Pueblo ingresó el Seguimiento de Cumplimiento de Sentencia (Exp. 3139-DPE-DPSE-2023), señalando que había solicitado a la entidad accionada un informe motivado en 8 días, conforme lo ordenado por la Unidad Judicial. Ese mismo **24 de enero de 2023**, el accionante pidió que se deje constancia del fenecimiento del plazo de 10 días para ejecutar la sentencia del 13 de junio de 2022 e insistió en la aplicación de la sanción del art. 22 LOGJCC. El **1 de febrero de 2023**, se dejó razón sobre los escritos y anexos presentados por la entidad el 13 de enero, en cumplimiento del auto de 30 de diciembre de 2022. El **2 de febrero de 2023**, el accionante solicitó que se deje razón sobre la providencia del 25 de enero de 2023 y reiteró la aplicación del artículo 22 LOGJCC por incumplimiento. El **3 de febrero**, la Unidad Judicial negó esta petición por improcedente, indicando que “la acción de incumplimiento” no corresponde a la naturaleza de la causa. El **14 de febrero de 2023**, el accionante volvió a solicitar la sanción del artículo 22 LOGJCC. El **24 de febrero de 2023**, la Unidad Judicial, ante el transcurso de los términos de la sentencia constitucional del 19 de julio de 2022, ordenó oficiar a la entidad accionada para que remita documentación de respaldo del cumplimiento. Además, delegó nuevamente a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento íntegro de la sentencia, otorgándole 10 días para presentar un informe. El **10 de marzo de 2023**, la entidad accionada informó, en atención a esa providencia, que con Memorando MTOP-AJSUB5-2023-57-ME del 27 de febrero de 2023 se dispuso al departamento de expropiaciones continuar con el trámite de pago. También indicó que con Memorando

MTOP-GINCE-2023-134-ME de 2 de marzo de 2023 el coordinador de Caminos y Expropiaciones insistió en el trámite ante la Subsecretaría de Delegaciones. La entidad sugirió nuevamente realizar un avalúo mediante perito del Consejo de la Judicatura. El **17 de marzo de 2023**, el accionante pidió que se deje razón sobre el cumplimiento del auto del 24 de febrero de 2023 y reiteró la aplicación inmediata del artículo 22 LOGJCC. El **31 de marzo de 2023**, la Unidad Judicial sentó razón sobre el incumplimiento de la sentencia por parte de la entidad accionada y que ésta había respondido al Oficio CPJ-SE-UJFMNA-CYG-2023-0186-OF de 2 de marzo de 2023. El **26 de abril de 2023**, el accionante ingresó el Informe de Seguimiento de Cumplimiento de la sentencia. La Defensoría del Pueblo señaló que la entidad accionada no respondió a sus requerimientos, por lo que no podía determinar si la sentencia había sido cumplida dentro del proceso de acción de protección 24201-2022-00154. **(resaltado fuera del texto)**

6. El 5 de mayo de 2023 el accionante ante el incumplimiento de la entidad accionada y debido a que había transcurrido un año desde que se dictó la sentencia de la Sala Provincial, de conformidad con el artículo 164 numeral 2 de la LOGJCC, solicitó a la Unidad Judicial la remisión del expediente de la acción de protección número 24201-2022-00154 a la Corte Constitucional, acompañando al mismo el informe de la Unidad Judicial en el que se contengan las razones del incumplimiento.
7. El 25 de mayo de 2023 la Unidad Judicial remitió el expediente a la Corte Constitucional; y, su informe sobre el cumplimiento de la sentencia.

1.2. Proceso ante la Corte Constitucional

8. El 13 de junio de 2023 la Corte Constitucional recibió el expediente del proceso que incluyó el informe de la jueza de la Unidad Judicial en relación con el cumplimiento de la sentencia.
9. El 18 de marzo de 2025, en atención a la renovación parcial de la Corte Constitucional se procedió con el resorteo del presente caso 72-23-IS, siendo asignado al juez constitucional Jorge Benavides Ordóñez, quien, en auto de 11 de abril de 2025, avocó conocimiento de la causa y dispuso que en el término de 5 días el accionante y las partes procesales procedan a emitir sus informes actualizados sobre el estado de cumplimiento de la sentencia objeto de la presente acción.
10. En auto de 24 de abril de 2025 el juez constitucional sustanciador, Jorge Benavides Ordóñez, insistió a la Unidad Judicial y a la entidad accionada sobre la emisión de sus informes actualizados en relación con el estado de cumplimiento de la sentencia objeto de la acción de incumplimiento.

11. El 19 de mayo de 2025 la Unidad Judicial remite el informe actualizado de cumplimiento de la causa 24201-2022-00154 suscrito por la jueza ejecutora.

2.Competencia

12. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones de incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales de conformidad con los artículos 436, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador (“CRE”); y, los artículos 162 al 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (“LOGJCC”).

3.Decisión judicial cuyo cumplimiento se solicita

13. La decisión cuyo cumplimiento se exige es la sentencia de 13 de junio de 2022 de la Unidad Judicial:

[...]Declarando vulnerados los derechos a la Seguridad Jurídica, el debido proceso, y de propiedad, garantizados en el Art. 82, 76.1, 66.26 de la Constitución de la República; disponiendo su reparación integral:1.- Se ordena al señor Ministro de Obras Públicas y Transporte, que en el plazo perentorio de treinta días, (30) cumpla con determinar el monto y el pago de la indemnización justa que por expropiación del bien materia de la presente acción le corresponde, así como cualquier otra medida tendiente a reparar las violaciones declaradas en la presente sentencia, mismas que se realizarán de común acuerdo entre los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el accionante señor Paúl Leonardo Roa López, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de esta Sentencia, considerando los valores determinados en el párrafo 23 de la presente sentencia [...].

Que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, publique en su Página Web, durante treinta días el contenido de esta sentencia, ofreciendo las disculpas públicas al accionante señor Paúl Leonardo Roa López.

14. Este fallo fue reformado en su numeral 1 por la sentencia de la Sala Provincial de 19 de julio de 2022:

[...] De oficio Reforma la sentencia subida en grado de fecha lunes 13 de junio del 2022, las 17h36, en lo que respecta al numeral “1” de la Decisión, disponiendo que el Ministro de Obras Públicas y Transporte, en el plazo de treinta días (30) contados a partir de la notificación de la sentencia cumpla con determinar el justo precio por concepto de expropiación de la predio de propiedad del Señor PAÚL LEONARDO ROA LÓPEZ, afectado por el Proyecto Vial denominado “Rehabilitación, Construcción de Obras Complementarias, Mantenimiento Rutinario y Periódico, Explotación y Operación de Sistema Vial, Chongón-Santa Elena (...) Corredor Arterial E-40 (...)” ubicado en las y Provincias de Guayas y Santa Elena, dispuesto mediante Acuerdo Ministerial No.020-2020 emitido por el Econ. José Gabriel Martínez Castro Ministro de Transporte y Obras Públicas; sin perjuicio, que de común acuerdo entre los representantes del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas y el accionante señor Paúl Leonardo Roa López, convengan el precio (sic)[...].

4. Argumentos de los sujetos procesales

4.1. De la parte accionante

15. El 04 de agosto de 2023 el accionante solicitó en atención al artículo 165 de la LOGJCC hacer efectiva la sentencia emitida con fecha 13 de junio de 2022, dictada por la Unidad Judicial; y, la sentencia de fecha 19 de julio de 2022 dictada por la Sala Provincial, seguida en contra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

4.2. De la Unidad Judicial

16. En su informe de remisión inicial de 25 de mayo de 2023, la jueza de la Unidad Judicial (“**jueza de ejecución**”), señaló que se demandó “la falta de notificación [de la] irrupción del predio de propiedad del accionante por parte de la empresa CVIALCO en virtud de la construcción de la carretera sin que exista la cancelación del justo precio por la pérdida que representa para el accionante, previo a la construcción anotada”.
17. En el mencionado Informe indicó que el accionante expuso que en su demanda de acción de protección que en el mes de febrero de 2020 la empresa CVIALCO empezó la construcción de una carretera (Paso lateral Santa Elena, Guayaquil), irrumpiendo un terreno propiedad del accionante en el Tambo, sin previa notificación, afectándose a su derecho a la propiedad. A pesar de que durante varios meses intentó resolver la situación ante el director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y presentó varias solicitudes por escrito ante el mencionado ministerio, sin que hasta el momento haya recibido una respuesta. Por lo que solicita que se declare a través de la demanda de acción de protección la vulneración del derecho a la propiedad.
18. Expresa que a fojas 146 con fecha de 13 de junio de 2022, consta la sentencia de la Unidad Judicial en la que indica que con la aceptación expresa del derecho vulnerado por parte de la entidad accionada:

[...]Dado que el Ministerio de Obras Públicas a través de su representante no ha negado el derecho del accionante a que previo a la aceptación de la construcción de la Obra Vial, se le otorgue un justo precio por los perjuicios ocasionados en el bien de su propiedad por parte del Estado, indicando que el Ministerio si tenía asignados dichos valores, sin embargo, aún no habían sido asignados directamente a su beneficiario debido a requerimientos administrativos que faltaban en dicho trámite. Con esta aceptación expresa del derecho vulnerado del accionante por parte de la entidad accionada, se emitió la sentencia aceptando la acción de protección [...].

19. Indica que la entidad accionada apeló la sentencia de 13 de junio del 2022 de la Unidad Judicial y la Sala Provincial, mediante sentencia de 19 de julio de 2022 negó el recurso de apelación y procedió a reformar de oficio el numeral 1 de la sentencia de la Unidad Judicial, en los siguientes términos:

[...]De Oficio Reforma la sentencia subida en grado de fecha lunes 13 de junio del 2022, las 17h36, en lo que respecta al numeral “1” de la Decisión, disponiendo que Ministro de Obras Públicas y Transporte, en el plazo de treinta días (30) contados a partir de la notificación de la sentencia cumpla con determinar el justo precio por concepto de expropiación de la predio de propiedad del Señor PAÚL LEONARDO ROA LÓPEZ, afectado por el Proyecto Vial denominado “Rehabilitación, Construcción de Obras Complementarias, Mantenimiento Rutinario y Periódico, Explotación y Operación de Sistema Vial, Chongón-Santa Elena (...) Corredor Arterial E-40 (...)” ubicado en las Provincias de Guayas y Santa Elena, dispuesto mediante Acuerdo Ministerial No.020-2020 emitido por el Econ. José Gabriel Martínez Castro Ministro de Transporte y Obras Públicas; sin perjuicio, que de común acuerdo entre los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el accionante señor Paúl Leonardo Roa López, convengan el precio.

20. Menciona que a fojas 272 del proceso constitucional, la Unidad Judicial ordenó mediante providencia de 24 de febrero de 2023 que se oficie al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para que remita bajo las prevenciones de ley la documentación que respalde la ejecución de lo dispuesto mediante sentencia, así también ordenó que se oficie a la Defensoría del Pueblo para que en atención al artículo 21 de la LOGJCC de seguimiento al cumplimiento íntegro de la sentencia constitucional.

21. Señala que con fecha 26 de abril de 2023, el accionante adjuntó el informe defensorial de seguimiento de cumplimiento de la sentencia de acción de protección número 24201-2022-00154, emitido el 21 de abril de 2023 que indicó lo siguiente:

[...]Habiendo pasado más que de sobre tiempo otorgado para que se dé respuesta sobre el cumplimiento o no de lo resuelto en sentencia de la Acción de protección No. 24201-2022-00154, de fecha 30 de diciembre del 2022 alas 1h30 y sin haber obtenido respuesta por parte del ministerio de transporte y Obras Públicas, no se puede determinar por parte de este despacho defensorial si se ha dado cumplimiento o no, por lo que quedamos atentos a alguna disposición suya señoría, es cuanto podemos informar(sic)[...].

22. La jueza de la Unidad Judicial en un informe actualizado ingresado el 19 de mayo de 2025, en relación con el cumplimiento de las sentencias, señaló que a la fecha no existe ninguna otra petición de la parte accionante respecto del cumplimiento de sentencia, y manifestó además lo siguiente:

[...] Hasta la presente fecha no se observa cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia constitucional. Por lo que se desprende del Informe de Expediente No. 3139-DPE-DPSE2023, de Seguimiento de Cumplimiento de Sentencia de Acción de Protección Nro.

24201-2022-00154, remitido por la Defensoría del Pueblo con fecha 21 de abril del 2023, a las 17h40, en el cual se manifiesta claramente que se ha excedido en el tiempo otorgado para que el accionado dé respuesta sobre el cumplimiento o no de lo resuelto en sentencia de la Acción de protección No. 24201-2022-00154, de fecha 30 de diciembre del 2022 a las 16h30, sin que hubiere respuesta por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas [...].

4.3. Del Ministerio de Transporte y Obras Pública

23. La entidad accionada pese a que fue debidamente notificada en relación con este proceso no ha remitido ningún escrito.

4.4. De la Procuraduría General del Estado

24. La Procuraduría General del Estado pese a que fue debidamente notificada en relación con este proceso no ha remitido ningún escrito.

5. Cuestiones Previas

25. De conformidad con los artículos 163 y 164 de la LOGJCC, en concordancia con el artículo 96 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional (“RSPCCC”), la ejecución de las sentencias y resoluciones constitucionales les corresponde a los jueces constitucionales de primera instancia que conocieron el proceso de origen. Solo de forma subsidiaria, esta Corte puede asumir dicha competencia a través de una acción de incumplimiento.⁴
26. De esta manera, esta Magistratura ha señalado que, para que pueda conocer una acción de incumplimiento y asumir de forma excepcional la competencia de ejecución de sentencias, la persona afectada deberá cumplir los requisitos contenidos en la LOGJCC,⁵ atendiendo al carácter subsidiario de esta acción. Por ende, previamente a pronunciarse sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento, corresponde a la Corte Constitucional determinar si se cumplieron los requisitos previstos en ordenamiento jurídico para ejercer esta acción.
27. Para tal efecto, este Organismo se plantea el siguiente problema jurídico:

¿El accionante cumple los requisitos previstos en la LOGJCC para ejercer la acción de incumplimiento de sentencias?

⁴ CCE, sentencia 90-22-IS/24, 21 de febrero de 2024, párr. 26; y, sentencia 45-22-IS/24, 17 de enero de 2024, párr. 25.

⁵ CCE, sentencia 103-21-IS/22, 17 de agosto de 2022, párr. 3

28. A partir de lo previsto en la LOGJCC y, en particular de la sentencia 226-22-IS/23, es posible esquematizar los requisitos que deben concurrir para que esta Magistratura conozca una acción de incumplimiento presentada por el juez ejecutor a petición de la persona afectada y son: impulso, requerimiento, plazo razonable:⁶

Impulso: La persona afectada debe promover el cumplimiento de la decisión ante el juzgador o la juzgadora de ejecución, previo a ejercer la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. No puede requerir la remisión del expediente a la Corte Constitucional de forma inmediata.

Requerimiento: La persona afectada debe solicitar a dicho órgano jurisdiccional que remita el expediente a la Corte Constitucional junto con el correspondiente informe en el que argumente sobre las razones del incumplimiento alegado y justifique los impedimentos para ejecutar la decisión.

Plazo razonable: El requerimiento aludido debe haber ocurrido después del transcurso de un tiempo prudencial para que la autoridad judicial pueda ejecutar la decisión.⁷ Dicho de otro modo, el requerimiento de remisión del expediente a la Corte no debe haber sido realizado de forma inmediata, sino que la parte accionante debe haber promovido el cumplimiento de la decisión judicial ante el juez ejecutor, y este debe tener el tiempo necesario para ejecutar su propia decisión.

Si no se cumple cualquiera de estos requisitos, la jurisprudencia de esta Corte establece que esto constituye razón suficiente para desestimar la acción, pues no son subsanables.⁸

En estos casos, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la acción ni analizar la actuación de la jueza o juez de instancia al que le corresponde ejecutar la decisión.⁹

29. En consecuencia, se procede a verificar los mencionados requisitos. Respecto del **impulso**, este Organismo constata que el accionante solicitó por doce ocasiones a la jueza ejecutora que disponga acciones dirigidas al cumplimiento de la sentencia (párrafos 4 y 5 supra).¹⁰ Por lo cual, se observa que el accionante cumple con este requisito.
30. En cuanto al **requerimiento**, de la revisión del expediente, esta Corte comprueba que el 05 de mayo de 2023 el accionante ante el incumplimiento de la entidad accionada y habiendo transcurrido un año desde que se dictó la sentencia de la Sala Provincial y de conformidad con el artículo 164 numeral 2 de la LOGJCC, solicitó la remisión del expediente de acción de protección a la Corte Constitucional y se acompañó al mismo el informe de la Unidad Judicial en el que se contiene las razones del incumplimiento.

⁶ CCE, sentencia 103-21-IS/22, 17 de agosto de 2022, párr. 35.

⁷ CCE, sentencia 103-21-IS/22, 17 de agosto de 2022, párr. 31.

⁸ CCE, sentencia 214-22-IS/23, 15 de diciembre de 2023, párr. 12.

⁹ CCE, sentencia 107-21-IS/24, de 28 de febrero de 2024, párr. 51.

¹⁰ Los impulsos del accionante a partir de la notificación de la sentencia de la Sala Provincial constan en los escritos de: 5 y 9 de agosto de 2022, 7 y 13 octubre de 2022, 23 de noviembre de 2022, 9 y 23 de diciembre de 2023, 24 de enero de 2023, 2 y 14 de febrero de 2023, 17 de marzo de 2023 y 26 de abril de 2023.

31. En relación con el **plazo razonable**, esta Magistratura verifica que el accionante con fecha 5 de agosto de 2022 solicitó el cumplimiento de la sentencia a la jueza ejecutora quien dispuso que en un plazo de 30 días “determinara el monto y pago de la indemnización justa y ejecutara las medidas de reparación”. El 10 de agosto la Unidad Judicial reiteró a la entidad accionada su obligación de fijar el justo precio del predio, sin embargo, el 7 de octubre, el accionante ante el incumplimiento de las sentencias “denunció el vencimiento del plazo y solicitó sanciones”. El 13 de octubre de 2022 la jueza ejecutora le concedió a la entidad accionada “cinco días para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias”. El 26 de octubre de 2022 la entidad accionada manifestó “su voluntad de cumplir la sentencia” y solicitó al accionante algunos documentos mismos que fueron entregados el 23 de noviembre de 2022. El 13 de diciembre de 2022, tras un nuevo pedido de cumplimiento del accionante, la entidad accionada mediante escrito de 20 de diciembre de 2022 indicó “su voluntad de cumplir con el pago y que el trámite está en avalúo”.
32. El 30 de diciembre de 2022, la Unidad Judicial delegó a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, otorgándole 10 días para emitir un informe, también ordenó a la entidad accionada que, en igual plazo, presente un informe detallando las acciones realizadas para ejecutar la sentencia. Por último, el 24 de febrero de 2023 la Unidad Judicial ordenó a la entidad accionada que “remita la documentación que respalde la ejecución” ante lo cual la entidad accionada con fecha 10 de marzo de 2023 indicó que “dispuso al departamento de expropiaciones que continúe con el trámite” y ante esta situación el accionante presentó el 5 de mayo de 2023 la acción de incumplimiento.
33. Este Organismos denota que la decisión fue emitida el 13 de junio de 2022 por la Unidad Judicial y ratificada en apelación el 19 de julio de 2022 por la Sala Provincial y la acción de incumplimiento se presentó el 05 de mayo de 2023, por lo tanto, transcurrieron aproximadamente 11 meses desde que se emitió la decisión constitucional hasta que se presentó la acción constitucional de incumplimiento, este lapso de tiempo constituye un plazo razonable para que la jueza de ejecución pudiera desplegar las actuaciones necesarias tendientes a verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas (párrafos 4 y 5 *supra*). Por lo que, se constata que la presentación de la demanda ocurrió una vez que transcurrió un plazo razonable y se cumple por lo tanto este requisito.

34. Por lo expuesto, el caso cumple los requisitos para que el accionante puedan presentar su demanda de acción de incumplimiento. En tal virtud, este Organismo analizará el posible incumplimiento de la decisión demandada, a partir de la documentación remitida por la Unidad Judicial y con relación al problema jurídico que se formule.

6. Planteamiento de los problemas jurídicos

35. El artículo 436 número 9 de la Constitución establece que la Corte Constitucional tiene como una de sus atribuciones conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Esta Corte además ha señalado que el alcance de la acción de incumplimiento es el de proteger a las personas ante el incumplimiento total o parcial de las obligaciones concretas dispuestas en una decisión constitucional, es decir, garantizar la tutela judicial efectiva de las partes procesales en relación con la ejecución integral de las decisiones.¹¹
36. En ese orden de ideas, es importante individualizar las 3 medidas de reparación en la sentencia de la Unidad Judicial de 13 de junio de 2022, la misma que fue reformada en su numeral 1 por la sentencia de la Sala Provincial de 19 de julio de 2022, y son las siguientes: (i) El Ministro de Obra Públicas y Transporte, en el plazo de treinta días (30) contados a partir de la notificación de la sentencia cumpla con determinar el justo precio por concepto de expropiación a favor del accionante, sin perjuicio, que de común acuerdo entre los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el accionante señor Paúl Leonardo Roa López, convengan el precio; (ii) Publicación de las disculpas públicas al accionante en la página web por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por un plazo de 30 días; y, (iii) La publicación del contenido de la sentencia de la Unidad Judicial en la página web de la entidad accionada durante 30 días.

¹¹ CCE, sentencia 142-23-IS/24, 18 de abril de 2024, párr. 15.

37. En tal virtud se formula el siguiente problema jurídico:

¿Las medidas de reparación dispuestas en las sentencias de la Unidad Judicial y la Sala Provincial de 13 de junio de 2022 y 19 de julio de 2022, respectivamente fueron integralmente cumplidas?

7. Resolución del problema jurídico

7.1. ¿Las medidas de reparación dispuestas en las sentencias de la Unidad Judicial y la Sala Provincial de 13 de junio de 2022 y 19 de julio de 2022, respectivamente fueron integralmente cumplidas?

38. En la sentencia de la Unidad Judicial de 13 de junio de 2022, estableció 3 medidas de reparación, el numeral 1 que contenía la primera medida de reparación fue reformada por la sentencia de la Sala Provincial de 19 de julio de 2022. Las 3 medidas de reparación contenidas en las sentencias de la Unidad Judicial y la Sala provincial son las que constan en el párrafo 33.
39. En relación con la **primera medida de reparación** (i) El Ministerio de Obra Públicas y Transporte, en el plazo de treinta días (30) contados a partir de la notificación de la sentencia cumpla con determinar el justo precio por concepto de expropiación a favor del accionante, sin perjuicio, que de común acuerdo entre los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el accionante señor Paúl Leonardo Roa López, convengan el precio. La sentencia reformada en su numeral 1 por la Sala Provincial ordenó a la entidad accionada: i) determinar el monto en concepto de indemnización en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la sentencia de apelación de fecha 19 de julio de 2022; ii) la determinación del monto de la indemnización podrá ser fijada de común acuerdo entre la entidad accionada y el accionante.
40. El fallo fue notificado el 20 de julio de 2022, fecha a partir de la cual empezó a correr el plazo de 30 días para la determinación del monto en concepto de justo precio.¹² De los argumentos del accionante, así como de los informes sobre el cumplimiento de la sentencia argumentos de la Unidad Judicial, no se puede evidenciar el cumplimiento de la determinación del monto del justo precio a favor del accionante (párrafos 17 a 22 *supra*).

¹² El plazo de los 30 días establecido en la sentencia de la Sala Provincial concluyó el 20 de septiembre de 2022.

41. La entidad accionante el 26 de octubre de 2022 solicitó que el accionante entregue documentación detallada en el Reglamento de la Ley del Sistema de Infraestructura Vial de Transporte Terrestre. El accionante dio cumplimiento a lo solicitado y posteriormente el 20 de diciembre de 2022 la entidad accionante señaló su “voluntad de dar cumplimiento” a las sentencias, sin embargo, manifestó que está sujeto a las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas y pone a consideración de la Unidad Judicial la posibilidad de nombrar un perito calificado del Consejo de la Judicatura para realizar la pericia de avalúo (párrafo 4 *supra*). Ante esta propuesta para determinar el monto del justo precio el accionante manifestó su desacuerdo y alegó que es “improcedente en atención al momento procesal en el que se encuentra la causa”. Por último, con fecha 13 de enero de 2023 la entidad accionada indicó que recibió la documentación entregada por el accionante y que la misma se encuentra en análisis y pendiente de que se habilite el sistema de pagos.
42. La Unidad Judicial mediante auto de 30 de diciembre de 2022, delegó el seguimiento del cumplimiento de la sentencia a la DPE para que en el término de 10 días emita informe sobre las acciones encaminadas para asegurar el cumplimiento de la sentencia. La DPE el 21 de abril de 2023 emitió su informe de seguimiento de cumplimiento de la sentencia e indicó que con fecha 19 de enero de 2023 notificó al accionante y a la entidad accionada que se tenga en cuenta el seguimiento de cumplimiento de la sentencia y solicitó a la entidad accionada que emita en el término de 8 días un informe motivado y copias certificadas sobre el cumplimiento de la determinación del valor por el concepto de justo precio que corresponde al accionante y sobre el pago de este.
43. La DPE concluyó que una vez que ha transcurrido el tiempo otorgado a la entidad accionada sobre el “cumplimiento o no de lo resuelto en sentencia dentro de proceso de acción de protección 24201-2022-00154 y al no haber obtenido respuesta no se puede determinar por parte del despacho defensorial si la misma se ha dado cumplimiento o no”. En consecuencia, la DPE no pudo informar el cumplimiento de las sentencias.
44. La jueza de ejecución en su informe de 25 de mayo de 2023, hace referencia al proceso y al informe presentado por la DPE el 21 de abril de 2023 concluyendo que hasta la presente fecha no se observa cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia constitucional. Por lo tanto, la jueza de ejecución a pesar de indicar que ha realizado las actuaciones legales correspondientes deja constancia del incumplimiento de la sentencia. Posteriormente la jueza de ejecución presentó un informe actualizado el 19 de mayo de 2025 en el que indicó lo siguiente:

[...]el juicio original conformado en 3 cuerpos mismo que se encuentra en la Corte Constitucional del Ecuador, por petición de incumplimiento de sentencia, sin que exista

ninguna otra petición por la parte accionante respecto del cumplimiento de sentencia (sic) [...] Hasta la presente fecha no se observa cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia constitucional. Por lo que se desprende del Informe de Expediente No. 3139-DPE-DPSE2023, de Seguimiento de Cumplimiento de Sentencia de Acción de Protección Nro. 24201- 2022-00154, remitido por la Defensoría del Pueblo con fecha 21 de abril del 2023[...].

45. En conclusión, en relación con la medida de reparación en la que se ordenó a la entidad accionada “determinar el justo precio en concepto de expropiación en el plazo de treinta días (30) contados a partir de la notificación de la sentencia de apelación, sin perjuicio, que de dicho valor pueda ser determinado de común acuerdo entre la entidad accionada y el accionante” se verifica que el plazo para el cumplimiento de la media inició el 20 de julio de 2022 fecha en la que se notificó la sentencia de la Sala Provincial y sin que hasta la presente fecha se haya cumplido en el plazo indicado por la sentencia la medida de determinación del monto del justo precio. Se evidencia además que no se pudo llegar a un acuerdo entre la entidad accionada y el accionante, por tanto, corresponde a este Organismo declarar el incumplimiento, por no estar justificada la demora en la determinación del justo precio.
46. En relación con la **segunda medida de reparación**, es decir la (ii) publicación de las disculpas públicas al accionante en la página web por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por un plazo de 30 días. El 13 de enero de 2023 la entidad accionada en relación con la publicación de disculpas públicas dispuesta en la sentencia presuntamente incumplida adjuntó “las evidencias del cumplimiento de la publicación en la página Web del Ministerio (link y captura de pantalla de la publicación)”. Es decir, consta en el expediente una copia simple de la sentencia y una captura de pantalla de la web de la entidad accionada, sin que este Organismo pueda tener constancia de la publicación en el banner principal del sitio web de la institución así como, un informe en el que se detalle el registro de actividades (historial log) de la publicación y de la publicación del banner, del que se advierta que efectivamente la entidad obligada publicó las disculpas públicas conforme lo ordenado en la sentencia cuyo cumplimiento se exige.
47. En relación con la **tercera medida de reparación**, es decir, (iii) la publicación del contenido de la sentencia de la Unidad Judicial en la página web de la entidad accionada durante treinta días, consta en el expediente una copia simple de la sentencia y la captura de pantalla de la web de la entidad accionada, sin que este Organismo pueda tener constancia de la publicación en el banner principal del sitio web de la institución, en consecuencia, tampoco se puede verificar si la página web de la entidad obligada publicó la sentencia cuyo cumplimiento se exige, en un plazo de 30 días.

48. Este Organismo verifica en primer lugar, que la entidad accionada no determinó el justo precio correspondiente al proceso de expropiación dentro del plazo de treinta días otorgado, plazo que comenzó a correr el 20 de julio de 2022, ni aportó información que justifique la demora o el incumplimiento, pese a los reiterados requerimientos efectuados sin que hasta la fecha se justifique la demora ni el incumplimiento. Tampoco se logró un acuerdo con el accionante respecto de dicho valor (párrafos 37 a 43) En segundo lugar, no se verificó el cumplimiento de las medidas de reparación consistentes en la publicación de disculpas públicas y de la sentencia en el sitio web institucional durante treinta días, pues las evidencias remitidas consisten únicamente en copias simples y capturas de pantalla que no permiten corroborar la efectiva difusión en el banner principal, ni su permanencia durante el plazo ordenado (párrafos 46 y 47).
49. En conclusión, este Pleno concluye que las medidas de determinación del justo precio, así como la publicación de la sentencia y disculpas públicas dispuestas en las sentencias alegadas no fueron cumplidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte configurándose el incumplimiento injustificado de las sentencias constitucionales.

8. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. **Aceptar** la acción de incumplimiento **72-23-IS**.
2. **Declarar** el incumplimiento de la sentencia de 13 de junio de 2022 de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia de Santa Elena y de la sentencia de 22 de julio de 2022 de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena.
3. **Disponer** como medidas de reparación, debido al incumplimiento de las sentencias y son las siguientes:
 - 3.1 **Disponer** que, en un término de 60 días, la entidad obligada presente un cronograma de cumplimiento de la determinación del justo precio y, proceda a cumplirla en un término de 120 días desde la notificación de la sentencia.
 - 3.2 **Disponer** la publicación de las disculpas públicas al accionante en la página web por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por un plazo de 30 días.

- 3.3. Disponer** la publicación del contenido de esta sentencia en la página web de la entidad accionada durante 30 días.
4. Devolver el proceso al juez executor para que vigile el cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en esta sentencia y deberá además remitir un informe semestral sobre su cumplimiento a esta Corte Constitucional.
- 5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.**



Firmado electrónicamente por:
**JHOEL MARLIN
ESCUDEO SOLIZ**
Validar únicamente con FirmaEC

Jhoel Escudero Soliz
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, en sesión jurisdiccional extraordinaria de viernes 28 de noviembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente
Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI

72231S-879a7



Caso Nro. 72-23-IS

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en la sesión respectiva.- **Lo certifico.-**

Documento firmado electrónicamente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Sentencia 147-24-IS/25
Juez ponente: José Luis Terán Suárez

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2025

CASO 147-24-IS

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA 147-24-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional desestima la acción de incumplimiento presentada respecto de la sentencia 26-18-IN/20, al evidenciar que no existen obligaciones exigibles que puedan solicitarse mediante esta garantía. La acción de incumplimiento de sentencias no cabe para exigir, en abstracto, el cumplimiento de declaratorias de constitucionalidad o inconstitucionalidad en las que no exista expresamente un mandato directo de hacer o no hacer verificable por este organismo.

1. Antecedentes procesales

1. El 16 de octubre de 2024, Aracely Marily Guamingo Santillán (“**accionante**”) presentó ante esta Corte (“**Organismo**”) una acción de incumplimiento en contra del Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas y Adolescentes Infractores (“**SNAI o entidad accionada**”). En su acción, la accionante solicitó el cumplimiento de la sentencia 26-18-IN/20 emitida por este organismo.¹
2. El 16 de octubre del 2024, la causa se identificó con el número 147-24-IS y su conocimiento le correspondió al entonces juez Pablo Enrique Herrería Bonnet.
3. El 13 de marzo de 2025, en el marco de la renovación parcial de la Corte Constitucional, fueron posesionados la jueza Claudia Salgado Levy y los jueces Jorge Benavides Ordoñez y José Luis Terán Suárez. El 18 de marzo de 2025 la causa fue resorteada al juez constitucional José Luis Terán Suárez (“**juez ponente**”).
4. El 16 de septiembre de 2025, el juez ponente avocó conocimiento de la causa, solicitó y concedió al director del SNAI y al accionante el término de tres días a fin de que informe a este organismo “si persiste el incumplimiento de la sentencia 26-18-IN/20 de 28 de octubre de 2020”.

¹ En esta sentencia se resolvió cuatro demandas de acción pública de inconstitucionalidad presentadas en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813, mismo que regulaba la compra de renunciaciones con carácter obligatorio. La accionante fue funcionaria del SNAI por seis años. La Corte Constitucional declaró inconstitucional las frases “obligatorias” y “Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración”, del referido Decreto. De la revisión de la demanda, se desprende que la intención del accionante fue proponer una acción de incumplimiento

2. Competencia

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 436.9 de la Constitución en concordancia con los artículos 162 al 165 de la LOGJCC, la Corte Constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales.

3. Decisión cuyo cumplimiento se exige

6. En su acción, la accionante alega el incumplimiento de la sentencia 26-18-IN/20 emitida por esta Corte, en la que se resolvió:

1. Aceptar parcialmente las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas dentro de los casos 26-18-IN, 23-19-IN, 30-19-IN y 7-20-IN.
2. En ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución, en concordancia con los artículos 74 y 76 numerales 4, 5 y 6 de la LOGJCC, se declara:

En el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 489 de 12 de julio de 2011, la inconstitucionalidad de las frases “*obligatorias*” y “*Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración*”; por lo tanto, el artículo permanecerá vigente de la siguiente forma:

“Artículo 8.- A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado.

‘Artículo...- Cesación de funciones por compra de renunciaciones con indemnización. - Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renunciaciones con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas.

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidoras, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo.

En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición General Primera de la LOSEP.

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que hubiere lugar.

La compra de renunciaciones con indemnización no es aplicable para las y los servidoras de libre nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.”

3. Esta sentencia produce efectos hacia el futuro conforme el artículo 95 de la LOGJCC, razón por la que no cubre situaciones que se hayan suscitado con anterioridad a su emisión. En virtud del artículo 96 numeral 1 de la LOGJCC, ninguna autoridad podrá aplicar el contenido de las frases declaradas inconstitucionales ni sus efectos en los términos en los que esta Corte se ha pronunciado. En consecuencia, a partir de la publicación de este fallo en el Registro Oficial, para el reingreso al sector público de los servidores y servidoras a quienes se les aplicó en su momento esta figura, no se podrá exigir el reintegro de los valores pagados como parte de la compra de la renuncia de manera obligatoria.

4. Argumentos de las partes procesales

4.1 Argumentos de la accionante y pretensión

7. Como antecedente, la accionante señala que su desvinculación fue el 31 de agosto de 2012 en un contexto “abrupto” a través del “Decreto Ejecutivo 813”.
8. La accionante señala que la aplicación del Decreto Ejecutivo, vulneró su derecho al trabajo, pues se ha visto impedida de desempeñar un cargo público.
9. La accionante también señala que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica en virtud de que, en su decir, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813 modifica el artículo 81 de la LOSEP, debido a que la figura de la “compra de renuncia obligatoria” coloca, en la práctica, a todos los servidores públicos en una misma situación que aquellos de libre nombramiento y remoción, permitiendo su desvinculación en cualquier momento, a pesar de que el propio artículo 81 de la LOSEP señala que dicho régimen tiene un carácter excepcional.
10. Por otro lado, la accionante sostiene que se vulneró su derecho a la “estabilidad laboral”, pues fue separada de “manera inconstitucional” de su cargo que tuvo la calidad de “permanente”. La accionante agrega que se le “despojó” de su sustento económico, y, en ese sentido, “es claramente factible que se sirvan declarar la inconstitucional de la norma impugnada”.
11. Con estos antecedentes, la accionante solicita que se ordene al SNAI el pago de la jubilación y se cancele los valores que le corresponderían desde la fecha que fue desvinculada en el año 2012 hasta la presente fecha.
12. En el escrito de 19 de septiembre de 2025, la accionante informó a este Organismo que persiste el “incumplimiento de la sentencia No. 26-18-IN/20, de 28 de octubre de 2020, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador”.

4.2 Del SNAI.

13. A pesar de haber sido notificado en legal y debida forma, el SNAI, no se ha pronunciado sobre el requerimiento que hiciera el juez ponente, según lo descrito en el párrafo 4 de la presente sentencia.

5. Cuestión previa

14. De conformidad con los artículos 163 y 164 de la LOGJCC, así como el artículo 96 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la ejecución de las sentencias y resoluciones constitucionales corresponde a los jueces constitucionales de primera instancia –juez ejecutor– que conocieron el proceso de origen. Solo de forma subsidiaria este Organismo puede asumir dicha competencia a través de una acción de incumplimiento.
15. En el caso en concreto, la accionante demandó el incumplimiento por parte del SNAI respecto de la sentencia 26-18-IN/20 y acumulados de 28 de octubre de 2020 emitida por este Organismo. En ese contexto, se debe primero analizar si la decisión cuyo cumplimiento se exige, procede o no a través de esta garantía jurisdiccional.
16. La decisión objeto de esta acción corresponde a una sentencia de control abstracto de constitucionalidad en la cual esta Corte Constitucional **(a)** declaró la inconstitucionalidad de las frases “obligatorias” y “*Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración*”, constantes en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 489 de 12 de julio de 2011; y, por otro lado, **b)**, estableció:

Esta sentencia produce efectos hacia el futuro conforme el artículo 95 de la LOGJCC, razón por la que no cubre situaciones que se hayan suscitado con anterioridad a su emisión. En virtud del artículo 96 numeral 1 de la LOGJCC, ninguna autoridad podrá aplicar el contenido de las frases declaradas inconstitucionales ni sus efectos en los términos en los que esta Corte se ha pronunciado. En consecuencia, a partir de la publicación de este fallo en el Registro Oficial, para el reingreso al sector público de los servidores y servidoras a quienes se les aplicó en su momento esta figura, no se podrá exigir el reintegro de los valores pagados como parte de la compra de la renuncia de manera obligatoria.

17. En virtud de la naturaleza de la decisión objeto de esta acción y de sus efectos, resulta indispensable recordar que los fallos provenientes de una acción pública de inconstitucionalidad —i.e., aplicación del control abstracto de constitucionalidad— no deciden sobre situaciones concretas sino sobre la compatibilidad de una norma jurídica, de forma abstracta y general con la Constitución. Por lo que, estas pueden ser

objeto de acción de incumplimiento solo cuando incluyan disposiciones con obligaciones concretas de hacer o no hacer, expresas, directas y exigibles, dirigidas a **un sujeto determinado**, que se agoten con su ejecución y sean verificables por este Organismo.² Además, este organismo señaló en la sentencia 129- 25-IS respecto a la IS:

De acuerdo con el art. 163 de la LOGJCC, el objetivo de la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales es verificar el cumplimiento de lo dispuesto en aquellas, es decir, de sus decisiones (decisum), mas no exigir la aplicación de criterios jurisprudenciales desarrollados en la motivación de esas sentencias y dictámenes (...) plantear una acción de incumplimiento de otras cuestiones ajenas al decisum de una sentencia implicaría realizar una nueva consideración de lo resuelto, lo que atentaría contra la institución de la cosa juzgada.

18. Esta Corte ha establecido que la acción de incumplimiento debe activarse específicamente para garantizar el cumplimiento de obligaciones concretas emitidas en decisiones provenientes de garantías jurisdiccionales y procesos constitucionales. Dichas obligaciones, además, **deben contener un mandato específico de hacer o no hacer para sujetos específicos**” (énfasis añadido).³
19. En la sentencia que se exige su cumplimiento, no existe una obligación de hacer o no hacer, expresa, directa y exigible, dirigida a un sujeto determinado. En tal virtud la sentencia 26-18-IN/20 y acumulados de 28 de octubre de 2020 escapa del objeto de esta garantía jurisdiccional activada.
20. Por otro lado, en el caso en concreto, tanto los argumentos y pretensión de la accionante pretende que el SNAI le “cancele” los valores dejados de percibir desde su desvinculación en 2012 hasta la presente fecha. Esta cuestión, es importante precisar que esta acción no puede ser utilizada con el fin de que este Organismo se pronuncie sobre supuestas vulneraciones de derechos cometidas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas y Adolescentes Infractores, pues aquello es ajeno al objeto de esta garantía jurisdiccional y resulta, por tanto, improcedente.

6. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Desestimar la acción de incumplimiento 147-24-IS.

² CCE, sentencia 155-22-IS/24, 22 de agosto de 2024, párr. 26.

³ CCE, sentencias 37-14-IS/20, 22 de julio de 2022, párrs. 17 y 22; 221-22-IS/24, 09 de mayo de 2024, párr. 25; 3-22-IS/24, 31 de enero de 2024, párr. 17.

2. Notifíquese y archívese.



Jhoel Escudero Soliz
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, en sesión jurisdiccional extraordinaria de viernes 28 de noviembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente
Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI

14724IS-879ac



Caso Nro. 147-24-IS

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en la sesión respectiva.- **Lo certifico.-**

Documento firmado electrónicamente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Sentencia 131-24-IS/25
Juez ponente: José Luis Terán Suárez

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2025

CASO 131-24-IS

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA 131-24-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional desestima una acción de incumplimiento presentada en contra de la sentencia dictada el 6 de octubre de 2020, por la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en el marco de una acción de protección. Se concluye que el accionante no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 164 de la LOGJCC, en tanto no solicitó al juez ejecutor la remisión del expediente procesal, junto con el informe detallado y motivado, a este Organismo.

1. Antecedentes

1.1 El proceso de origen

1. El 28 de agosto de 2020, el señor Edwin Klever Tipanquiza Escobar (“**accionante**”) presentó una acción de protección en contra de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (“**AMT**”). En su demanda, aludió que el 6 de mayo de 2016 se le notificó con un procedimiento sancionador y la emisión de revocatoria y terminación de la habilitación operacional de su vehículo, tipo taxi, de placas PDB-4450. La causa se identificó con el número 17233-2020-02689.
2. El 6 de octubre de 2020, la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha (“**Unidad Judicial**”) aceptó parcialmente la acción de protección,¹ y dispuso una reparación económica.² Inconforme, el accionante interpuso recurso de apelación.

¹ La Unidad Judicial dispuso que la AMT “en el término de tres días deberá realizar el trámite correspondiente a efectos de levantar la suspensión de la que ha sido sujeto el legitimado activo para que pueda continuar con el trámite que le corresponda con el propósito de que pueda matricular y pasar la revisión del automotor de placas PDB-4550 y continúe prestando el servicio de transporte público”. Además, resolvió que se capaciten a todas las autoridades y agentes públicos “encargados de atender y sustanciar procedimientos administrativos” en cumplimiento de los estándares internacionales.

² Como reparación económica, la Unidad Judicial dispuso que se cancele al accionante los honorarios profesionales, las costas y los gastos en los cuales incurrió, siempre y cuando se justifiquen.

3. El 17 de marzo de 2021, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (**“Corte Provincial”**), desestimó el recurso de apelación, y confirmó la sentencia venida en grado.

1.2 Fase de ejecución

4. El 15 de octubre de 2020, la AMT presentó un escrito, indicando lo siguiente:
 1. [...] [A]djunto sírvase encontrar Memorando No. GADDMQ-AMT-DRAV-TC-2020-0425-M de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por el Coordinador de Transporte Comercial, quien señala textualmente: “Que la Habilitación Operacional 13613, de la Operadora COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATAX S.A, consta a nombre del señor EDWIN KLEVER TIPANQUIZA ESCOBAR, con el vehículo de placa PDB4450, el mismo que se encuentra en estado ACTIVO”.
 2. Respecto a la capacitación dispuesta adjunto sírvase encontrar Memorando No. GADD-AMTAL-2020-02384-M [...] a fin de que esta última en el ejercicio de sus funciones gestione una capacitación con el ICAM, en la cual se cumpla con los parámetros dispuestos por su autoridad.
 3. En cuanto tiene que ver a la reparación económica su autoridad dispuso que la Agencia Metropolitana de Tránsito cancele al [accionante] el rubro asumido por él, por concepto de honorarios profesionales de quienes le asistieron en la defensa, las costas y gastos incurridos; sin embargo, hasta la fecha no se ha corrido traslado a la AMT con los documentos que permitan ejecutar esta disposición.
5. El 22 de abril de 2021, el accionante informó a la Unidad Judicial que la AMT no ha dado cumplimiento a ninguna de las disposiciones ordenadas en la sentencia. Añadió que la AMT nunca levantó la medida impuesta sobre él para poder pasar la revisión matricular, por lo que solicitó que, en el término de tres días, se dé el levantamiento de la suspensión. También, que, en lo referente a las capacitaciones, se delegue a la Defensoría Pública el seguimiento del cumplimiento; y que se sirva mandar, a la AMT, a cancelar las costas y gastos de defensa.
6. El 26 de abril de 2021, la Unidad Judicial dispuso que la AMT en el término de 72 horas **(i)** justifique el levantamiento de la suspensión de la que fue sujeto el accionante, **(ii)** presente constancia de haber capacitado a las autoridades y agentes públicos, e **(iii)** indique si ya ha cancelado los honorarios profesionales de la defensa del accionante.
7. El 7 de mayo de 2021, el accionante presentó un escrito indicando que hasta el momento no se ha justificado el levantamiento de la suspensión. Añadió que, en virtud de la reparación económica, se tome en cuenta las multas y recargos impuestos por la AMT en contra del accionante; y que se paguen los valores pendientes.

8. El 10 de mayo de 2021, la Unidad Judicial ordenó que en el término de 72 horas se “justifique en legal y debida forma el levantamiento de la suspensión de la que ha sido sujeto el [accionante]”. Además, instó a que se remitan copias certificadas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a efecto de que se calcule el monto a pagar.
9. El 13 de mayo de 2021, la AMT informó a la jueza ejecutora que ya ha cumplido la sentencia de la Unidad Judicial, en lo relativo al levantamiento de la suspensión.³ Así mismo, señaló que ya se han realizado las gestiones pertinentes para que en la partida presupuestaria se tome en cuenta el valor a pagarle al accionante;⁴ sin embargo, que en función de haberse remitido el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo, es necesario que exista un pronunciamiento por parte de la Unidad Judicial, indicando si (i) es necesario u obligatorio que se comparezca con abogado particular en el derecho administrativo, para que establezca un monto razonable de gastos por honorarios, y (ii) se identifique en el informe “el lapso de tiempo respecto del cual pudo determinar que la institución le generó la afectación que implicó una reparación económica”.
10. El 26 de agosto de 2021, mediante un escrito, el accionante indicó que pasó la revisión vehicular el 5 de mayo de 2021; sin embargo, que la suspensión se mantiene, y que no pasó la matriculación. Solicitó que se remita el proceso a Fiscalía por desacato.
11. El 31 de agosto de 2021, la Unidad Judicial dispuso que, en el término de setenta y dos horas, la AMT remita a la Unidad Judicial “respaldos y justificativos en los que se evidencie el cumplimiento de la sentencia de fecha 06 de octubre de 2020”.
12. El 3 de septiembre de 2021, la AMT expuso que ya se han enviado previamente memorandos en los cuales se indica que el vehículo del accionante se encuentra activo, y que se justificaron las capacitaciones dispuestas en la sentencia. Añadió que el monto a pagar todavía no se ha remitido por parte del Tribunal Distrital.
13. El 21 de septiembre de 2021, el accionante, respecto de la resolución AMT-AL-AR-0504-2020, solicitó su “nulidad y ampliación”. Para el efecto, aludió que:
 - 1.- El trámite administrativo AMT-AL-AR-0504-2020, como excepción digo que esta caducado [por] haber transcurrido más del termino para dictar la resolución (sic).
 - 2.- Conforme la resolución AMT-AL-AR- 0504-2020, solicito nulidad procesal por haber cambiado los hechos del año 2015, al 2018 y por no haber notificado con el acto procesal

³ Para el efecto, adjuntó el memorando GADDMQ-AMT-DRAV-TC-2020-0425-M, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por el Ab. Socrates David Jiménez Abrigo, Coordinador de Transporte Comercial, quien señala textualmente: “Que la Habilitación Operacional 13613, de la Operadora COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATAX S.A, consta a nombre del señor [accionante], con el vehículo de placa PDB4450, el mismo que se encuentra en estado ACTIVO”.

⁴ Para ello, adjuntaron el memorando GADDMQ-AMT- CPSGE-2021-0394-M, de 07 de mayo de 2021.

para el cual será sancionado, además a la vigencia del inicio de la sanción correspondía otras normas jurídicas y también por no haber seguido el debido proceso esto es, el no haber actuado la prueba y se me ha dejado en indefensión conforme C.R.E. por tanto, es decir una resolución que no está motivada, por tanto es nula la resolución (sic).

3.- Conforme a la sentencia de la Unidad Judicial, [...] [la AMT] está en contra de una orden de autoridad judicial por que se emite la sentencia en el año 2020, y la sentencia menciona que se levante [...] desde el 2016 hasta el 2020 no se ha podido pasar la revisión vehicular, excepto 2017 que se pagó la multa entonces lo demás quedaría sin efecto, es decir 2015, 2016, 2017 por tanto quedaría subsanado con el paso del año 2017 [...] posterior como todavía estaba en estado suspendido, 2018 en adelante quedaría sin pasar la revisión....he aquí el inicio de la acción...por tanto con la acción de protección la jueza ordenó levantar la suspensión y pasar la revisión vehicular... sin embargo, desde la foja 26-32 hemos presentado A.M.T solicitando pasar la revisión, SIN RESPUESTA después de tanto insistir se pasó la revisión a foja 33 el documento que obra y con fecha 5 mayo de 2021 estado aprobado [...].Y, por tanto el año 2018 al 2020 queda subsanado con el paso del año 2021, según así lo afirmó el abogado A.M.T en la AUDIENCIA PÚBLICA DE ACCIÓN PROTECCIÓN Y ASÍ DEBE SER EN DERECHO (énfasis en el original).

14. El 27 de septiembre de 2021, el accionante presentó un nuevo escrito solicitando que se sienta razón del incumplimiento de la sentencia. Además, puso en conocimiento de la Unidad Judicial que, a su juicio, los expedientes administrativos iniciados por la AMT en su contra constituyen “un incumplimiento [de] sentencia, desacato, fraude procesal, discriminación y otra vez exceso de poder”.
15. El 11 de octubre de 2021, ingresó otro escrito del accionante a la Unidad Judicial, a través del cual se indicó que la AMT no dio contestación a los escritos presentados, por lo que se ha hecho caso omiso a lo ordenado por la jueza. Por consiguiente, y frente al incumplimiento de la sentencia, solicitó que: (i) se oficie a la Fiscalía por desacato y fraude procesal; (ii) se destituya a los abogados patrocinadores de la AMT; y (iii) se abra un incidente de daños y perjuicios por vulneración de derecho.
16. El 13 de octubre de 2021, la Unidad Judicial dispuso que se oficie a la Defensoría del Pueblo para que, en el término de 5 días, presenten un informe detallado sobre el cumplimiento de la sentencia. En respuesta, la Defensoría presentó un escrito el 29 de octubre de 2021, solicitando que le den una prórroga de 5 días para presentarlo.
17. El 28 de octubre de 2021, la AMT presentó un escrito insistiendo que sí se ha cumplido la sentencia, salvo la disposición de reparación económica, ya que todavía no se ha remitido un monto por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.
18. El 4 de noviembre de 2021, la Unidad Judicial dispuso a la AMT que, en el término de 5 días, aclare “la fecha de la última revisión técnica vehicular realizada al vehículo de placas PDB4450 [del accionante], e indique detalladamente el motivo por el que se revocó el permiso de operación”.

19. El 19 de noviembre de 2021 el accionante ingresó un nuevo escrito, indicando que no se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por la Unidad Judicial. Sobre dicho pedido, el accionante insistió el 8 de diciembre de 2021, al no obtener respuesta. Así mismo, se presentaron insistencias del incumplimiento el 10 de enero de 2022, el 17 de enero de 2022 y el 18 de febrero de 2022.
20. El 14 de marzo de 2022, la jueza de la Unidad Judicial llamó la atención a la delegada de la Defensoría del Pueblo, ya que no se ha presentado el informe ordenado. Además, conminó a que se lo presente en el término de 10 días, por la complejidad del caso.
21. El 28 de marzo de 2022, la Defensoría del Pueblo presentó el informe de seguimiento de cumplimiento de sentencia, en cuyas conclusiones se señaló que:
 - 3.1. La Agencia Metropolitana de Tránsito comunicó el 13 de octubre del 2020, que se encuentra activa la habilitación operacional 13613 de la operadora compañía de transporte de taxis ejecutivos Antenax S.A., correspondiente al [accionante].
 - 3.2. El 05 de mayo del 2021, el vehículo con placa PDB4450 aprobó la revisión técnica.
 - 3.3. El 06 de agosto del 2021, la [AMT] revocó la habilitación operacional [número] 13613, correspondiente a la operadora compañía de transportes de taxis ejecutivos Antenax S.A., del vehículo de placas PDB4450, perteneciente al [accionante] [...].
 - 3.4. El 08 de septiembre del 2021, la AMT comunicó al accionante que no es procedente realizar la revisión técnica del vehículo de placas PDB-4450, puesto que se encuentra revocada la habilitación operacional [número] 13613 [...].
 - 3.5. La Agencia Metropolitana de Tránsito remitió acta y listado de participantes de la capacitación otorgada el 27 de abril del 2021, mediante la plataforma virtual Zoom, dirigida a personal de la Coordinación de Gestión Legal de la AMT, quienes se encargan del desarrollo y tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores [...].
 - 3.7. El [accionante] retiró el 22 de febrero del 2022 del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, el certificado de depósito judicial N° 17-81-100-0926, por el valor de ocho mil doscientos siete dólares (\$8.207,00); monto que corresponde a la reparación económica determinada por el referido Tribunal.
22. El 29 de marzo de 2022, la Unidad Judicial solicitó que la Defensoría del Pueblo amplíe su informe, para que “indique con precisión si se dio o no cumplimiento a lo ordenado en sentencia de fecha 06 de octubre de 2020”. En contestación, el 5 de abril de 2022, la Defensoría instó a que se convoque a audiencia a las partes, y se tome en cuenta el informe previamente presentado, en el que se da el seguimiento pertinente. Posteriormente, en escrito de 10 de junio de 2022, ratificó el contenido del informe.

23. El 28 de abril de 2022, el accionante presentó un nuevo escrito, indicando que se le abrieron nuevos expedientes por parte de la AMT, sin tomar en cuenta que estaba suspendido en el intervalo de los años 2015-2020, por lo que no podía aprobar las revisiones técnicas vehiculares. Además, insistió en el incumplimiento de la sentencia.
24. El 20 de julio de 2022, la Unidad Judicial, a través de un auto declaró que la AMT “no ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por esta autoridad [...] en virtud de que no se permitió al [accionante] realizar el proceso de revisión y matriculación del vehículo de placas PDB-4450 conforme fuera dispuesto en el fallo en referencia”. Por lo tanto, dispuso que la Dirección de Registro y Administración Vehicular de la AMT:
- [E]n el término de veinte días, realice el trámite que sea necesario a efectos de levantar la suspensión de la que ha sido sujeto el legitimado activo y pueda efectuar la revisión vehicular y matricular el automotor en referencia, tomando en consideración los argumentos vertidos en la sentencia en mención y los años aplicables, esto es desde el año 2015 hasta el año 2020, hecho lo cual se pondrá en conocimiento de esta autoridad el día y la hora en que se efectuará el proceso con el propósito de que sea constatado.
25. El 28 de julio de 2022, la Dirección de Registro y Administración Vehicular ingresó un escrito, indicando que en el sistema AS-400 de revisión vehicular, se registran valores pendientes de pago, los cuales deberán ser cancelados previo a que se agende el turno para la revisión técnica vehicular del automotor del accionante. Dichos pagos fueron puestos en conocimiento de la Unidad Judicial el 15 de septiembre de 2022. Sin embargo, en escrito de 13 de octubre de 2022, la AMT informó que hay un valor pendiente de pago, relativo a la tasa por concepto de revisión vehicular. Por otro lado, el accionante ingresó un escrito el 17 de octubre de 2022, indicando que todos los valores han sido pagados y conminó a que se proceda con el cumplimiento de la sentencia. Finalmente, el 16 de noviembre de 2022, la AMT presentó la constancia del turno de revisión técnica vehicular otorgado al accionante.
26. El 17 de agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo conminó a la Unidad Judicial a que se pronuncie respecto de si se debe continuar con el seguimiento de la causa, caso contrario, se sirva evaluar el cumplimiento o no de la sentencia. En respuesta, el juez de la Unidad Judicial puso en conocimiento de las partes procesales el escrito, para que se pronuncien en el término de 5 días. Ante la falta de contestación, la Defensoría del Pueblo insistió en su petición, mediante escrito de 27 de noviembre de 2023.
27. El 16 de enero de 2024, el accionante indicó que la sentencia no se encuentra cumplida “por cuanto el vehículo no ha pasado la revisión técnica vehicular como servicio público [sino] como servicio particular y a la presente fecha el vehículo ya ha cumplido su vida útil”. Añadió que “ha sufrido actos ulteriores a la sentencia porque el vehículo se encuentra bloqueado por la Agencia Nacional de Tránsito” y suprimido por la AMT.

28. El 30 de septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo insistió en que se evalúe si ya se dio o no cumplimiento de la sentencia, y si se debe continuar con el seguimiento. Una vez que se corrió el traslado al accionante, este indicó, a través de escrito de 16 de octubre de 2024, que no se ha cumplido con la reparación integral, y alegó que:

[N]unca desbloquearon para poder pasar la revisión técnica vehicular y la matriculación como servicio público, sin embargo, se dispuso el poder pasar como particular, en la actualidad está más bien revocada la habilitación operacional número 13613 perteneciente al [accionante]. Es decir, no se ha cumplido con la autorización para poder pasar la revisión técnica vehicular ni la matriculación del vehículo tipo taxi de placas PDB-4450 es más me iniciaron más procesos administrativos con toda la venganza.

1.3 Trámite ante la Corte Constitucional

29. El 17 de septiembre de 2024, el accionante presentó una acción de incumplimiento de sentencia de forma directa ante esta Corte. En dicha acción, alegó el incumplimiento de la sentencia de 6 de octubre de 2020, dictada por la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha.
30. Mediante sorteo electrónico de 17 de septiembre de 2024, la causa fue identificada con el número 131-24-IS y su conocimiento le correspondió a la entonces jueza Daniela Salazar Marín. Sin embargo, en el marco de la renovación parcial de la Corte Constitucional, fueron posesionados la jueza Claudia Salgado Levy y los jueces Jorge Benavides Ordoñez y José Luis Terán Suárez. Consecuentemente, el 18 de marzo de 2025, la causa fue resorteada y le correspondió al juez constitucional José Luis Terán Suárez su conocimiento (“**juez ponente**”).
31. El 6 de octubre de 2025, el juez ponente avocó conocimiento de la causa y dispuso (i) al accionante, (ii) a la AMT, y (iii) a la Unidad Judicial que se pronuncien sobre el presunto incumplimiento de la sentencia de 6 de octubre de 2020.

2. Competencia

32. De conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 436 de la Constitución de la República del Ecuador (“**CRE**”) en concordancia con los artículos 162 al 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (“**LOGJCC**”), la Corte Constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales.

3. Decisión cuyo cumplimiento se discute

- 33.** El accionante manifiesta el incumplimiento de la sentencia del 6 de octubre de 2020, emitida por la Unidad Judicial. Dicha sentencia ordenó lo siguiente:

[...] [La AMT] en el término de tres días deberá realizar el trámite correspondiente a efectos de levantar la suspensión de la que ha sido sujeto el legitimado activo para que pueda continuar con el trámite que le corresponda con el propósito de que pueda matricular y pasar la revisión del automotor de placas PDB-4550 y continúe prestando el servicio de transporte público. Adicionalmente deberá capacitar a todas las autoridades y agentes públicos encargados de atender y sustanciar procedimientos administrativos y cumplimiento de los estándares internacionales previstos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia administrativa.

[...] Como reparación económica deberá cancelar [la AMT] el rubro asumido por él por concepto de honorarios profesionales de quienes le asistieron en la defensa, las costas y gastos incurridos siempre y cuando documente de conformidad con lo establecido en la Resolución 123-2016 expedida por el Consejo de la Judicatura y publicada en el suplemento del Registro Oficial 821 de 18 de agosto de 2016 en el término de tres días. Todo lo anterior sin perjuicio del derecho de repetición que le asiste en contra de los funcionarios negligentes que intervinieron en la sustanciación del procedimiento sancionador No. AMT-ALC-CA-0341-2016.- Se supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y se dará por concluida la presente causa una vez que la [AMT] haya dado cabal observancia a lo dispuesto [...].

4. Argumentos de las partes procesales

4.1. Fundamentos y pretensión del accionante

- 34.** El accionante, a través de su demanda, indica que se ha incumplido la sentencia de la Unidad Judicial, por cuanto la AMT no cumplió con levantar la suspensión ordenada en la sentencia. A su criterio, ello vulneró sus derechos a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, y debido proceso en la garantía de la motivación.
- 35.** Además, alude que fue víctima de actos ulteriores a la sentencia, ya que se le abrió un nuevo expediente “por no haber cumplido el paso de la revisión técnica vehicular, terminaron revocando a pesar de que tenían suspendido desde el año 2015 al 2020 fecha que se presentó la acción de protección es decir nunca se pudo pasar la revisión y matriculación”. Sumado a ello, indica que le abrieron otro expediente administrativo sancionatorio, por no haber pasado la revisión técnica vehicular del año 2018. Añade que terminaron revocando su habilitación operacional, pero que “nunca se abrió el término de la prueba para poder descargar”.

36. Culmina solicitando que “se declare el incumplimiento de la sentencia de acción de protección 17233-2020-02689, por no haber cumplido en la parte resolutive”.

4.2. Argumentos del juez ejecutor

37. El juez ejecutor de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, no remitió informe alguno en respuesta a la providencia de 6 de octubre de 2025.

4.3. Argumentos de la Agencia Metropolitana de Tránsito

38. El 8 de octubre de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito, como entidad obligada del cumplimiento, presentó una solicitud de prórroga para cumplir con el auto de 6 de octubre de 2025,⁵ sin presentar adjunto un informe de descargo.

39. El 15 de octubre de 2025, la AMT presentó un informe alegando que:⁶

Mediante memorando [número] GADDMQ-AMT-DRAV-TC-2020-0425-M de 13 de octubre de 2020, [...] [se informó que] la Habilitación Operacional 13613, de la Operadora COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS ANTENATAX S.A., consta a nombre del [accionante], con el vehículo de placa PDB4450, mismo que se encuentra en estado de ACTIVO. Corroborando lo anterior, mediante memorando [número] GADDMQ-AMT-CGJ-2025-09527-M de 13 de octubre de 2025, [se] informó: [...] se adjunta la información del Sistema AS400, “Consulta de Detalle de Transacciones de Registro Municipal de Transporte”, en donde se evidencia que, en su momento, se procedió a levantar [la] suspensión de la habilitación [de] operaciones [número] 13613.

[...] De la revisión del [e-SATJE] se tiene que, en cumplimiento al artículo 19 de la [LOGJCC], se tramitó la respectiva cuantificación de la reparación económica en favor del accionante ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, signándole la causa Nro. 17811-2021-01242. Durante la sustanciación de dicho proceso, mediante auto interlocutorio de 21 de marzo de 2022, la autoridad judicial determinó expresamente que: [...] [la AMT] ha realizado el pago por reparación económica, por el valor de [USD 8.207,00], valores que corresponden al pago dispuesto por este Tribunal, cumpliendo integralmente lo resuelto en la sentencia [...] (Énfasis en el original).

40. La AMT alega que, sobre la base de lo expuesto “se certifica que la suspensión del registro operacional [número] 13613 [...] fue levantada por la [AMT]; y, por lo tanto, el accionante se encontraba plenamente habilitado para realizar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular del automotor PDB4450”. Añadió que se

⁵ En la solicitud, la AMT solicita “se conceda una prórroga de 72 días término, a fin de esta entidad municipal cumpla con lo dispuesto en auto de 06 de octubre de 2025. Toda vez que, la [AMT] se encuentra recabando la documentación de sustento que permita justificar el cumplimiento de la sentencia [...]”.

⁶ Este Organismo considera pertinente indicar que el escrito fue presentado fuera del término de 3 días otorgado por la Corte. Sin perjuicio de ello, en virtud de la prórroga solicitada, se hará referencia de los argumentos planteados por la AMT en esta sección, en virtud del principio de contradicción.

“cumplió de forma efectiva la disposición de capacitar a los funcionarios públicos encargados de sustanciar procedimientos administrativos”, y que se cumplió con la totalidad de la reparación económica dispuesta en la sentencia de Unidad Judicial.

5. Cuestión previa

41. La Corte Constitucional ha determinado que, para que pueda conocer una acción de incumplimiento y asumir de forma excepcional la competencia de ejecutar la sentencia, la persona afectada deberá cumplir con los requisitos contenidos en la LOGJCC.⁷ Por ello, previamente a pronunciarse sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento, corresponde a este Organismo determinar si se cumplieron los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para ejercer esta acción.
42. En el presente caso, la acción de incumplimiento se ha presentado directamente ante la Corte por parte del afectado. Por tanto, es preciso que se analice si se cumplieron con los requisitos legales. Este Organismo considera pertinente indicar que, si no se cumple cualquiera de los requisitos, la jurisprudencia de esta Corte lo considera como razón suficiente para desestimar la acción. En dicho caso, no correspondería emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la acción, ni analizar la actuación de la jueza o juez de instancia al que le corresponde ejecutar la decisión.⁸ Sin perjuicio de ello, se plantea el siguiente problema jurídico:

5.1. ¿El accionante cumplió con los requisitos previstos en el artículo 164 de la LOGJCC para ejercer la acción de incumplimiento directamente ante la Corte Constitucional?

43. La acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales es de naturaleza subsidiaria, y su objeto es verificar que una decisión constitucional haya sido cumplida íntegramente. En tal sentido, este Organismo ha determinado que, para conocerla, y asumir de forma excepcional la competencia de ejecutar la sentencia, la persona afectada deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 163 y 164 de la LOGJCC y 96 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional (“RSPCCC”).⁹ Por otra parte, la jurisprudencia de esta

⁷ En la sentencia 56-18-IS/22, párr. 20, sobre la base de la sentencia 103-21-IS/22, esta Corte estableció que “[...] las causas de acción de incumplimiento pendientes de resolución requieren una verificación de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 163 y 164 de la LOGJCC”.

⁸ CCE, sentencia 185-22-IS/23, 15 de noviembre de 2023, párr. 16.

⁹ Estos requisitos están previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 164 de la LOGJCC y se refieren a la acción de incumplimiento presentada a petición de parte, respecto de una sentencia dictada por las y los jueces ordinarios que conocen garantías jurisdiccionales. Por su parte, el numeral 3 del artículo 164 se refiere a los presupuestos para ejercer la acción de forma directa ante la Corte Constitucional y el numeral 4 de esta norma regula la acción de incumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional.

Corte ha determinado la necesidad de realizar un examen previo que permita conocer las acciones de incumplimiento.¹⁰

44. Así, la Corte Constitucional ha señalado los requisitos que deben concurrir para que la persona afectada pueda plantear una acción de incumplimiento directamente ante la Corte Constitucional, siendo estos: **i)** impulso, **ii)** requerimiento, **iii)** plazo razonable y, **iv)** negativa expresa o tácita del juez ejecutor. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos constituye razón suficiente para desestimar la acción.¹¹
45. En el caso concreto, el accionante presentó directamente la acción de incumplimiento ante este Organismo, el 17 de septiembre de 2024.
46. Respecto del **primer requisito**, se evidencia que el accionante, sí presentó varios escritos ante el juez ejecutor de la Unidad Judicial, a través de los cuales solicitó que se disponga el cumplimiento de la sentencia a la AMT.¹² A partir de ello, esta Corte deduce que el accionante sí promovió el cumplimiento de la sentencia ante la autoridad judicial encargada de la ejecución, cumpliendo así con el impulso.
47. En referencia al **segundo requisito**, respecto del requerimiento, esta Corte observa que el accionante no requirió la remisión del expediente a la Corte Constitucional, ni solicitó que se envíe el informe detallado y motivado correspondiente. De allí, que no se cumple con el requisito establecido en el artículo 164.2 de la LOGJCC.
48. Sobre el **tercer requisito**, se observa que la sentencia, cuyo incumplimiento se alega, se emitió el 6 de octubre de 2020, por lo que, hasta el 17 de septiembre de 2024 –fecha de presentación de la acción de cumplimiento– pasó un tiempo aproximado de cuatro años, y consecuentemente se cumple con el requisito de plazo razonable.

¹⁰ CCE, 103-21-IS/22, 17 de agosto de 2022, párr. 22; 29-23-IS/24, 19 de septiembre de 2024, párr. 24.

¹¹ CCE, sentencia 156-22-IS/24, 08 de febrero de 2024, párr. 19, determina que: “[...] es posible esquematizar los siguientes requisitos que deben concurrir para que la persona afectada pueda plantear una acción de incumplimiento directamente ante la Corte Constitucional: **19.1. Impulso:** La persona afectada debe impulsar la ejecución; esto es, debe promover el cumplimiento de la sentencia ante la autoridad judicial encargada de la ejecución. **19.2. Requerimiento:** La persona afectada debe solicitar a la autoridad judicial encargada de la ejecución que remita el expediente y su informe a la Corte Constitucional; **19.3. Plazo razonable:** El requerimiento debe haber ocurrido después del transcurso de un plazo razonable para que la autoridad judicial pueda ejecutar la decisión; **19.4. Negativa expresa o tácita del juez ejecutor:** La autoridad judicial ejecutora debe haber realizado una de las siguientes conductas: (i) negado el requerimiento o (ii) incumplido el término de cinco (5) días previsto en el artículo 164 de la LOGJCC para remitir el expediente y el informe a la Corte Constitucional”. // 20. Si no se cumple cualquiera de estos requisitos, la jurisprudencia de esta Corte establece que esto constituye razón suficiente para desestimar la acción. En estos casos, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la acción ni analizar la actuación de la jueza o juez de instancia al que le corresponde ejecutar la decisión. (Énfasis añadido).

¹² Escritos presentados: 22 de abril de 2021, 7 de mayo de 2021, 26 de agosto de 2021, 21 y 27 de septiembre de 2021, 11 de octubre de 2021, 19 de noviembre de 2021, 8 de diciembre de 2021, 10 y 17 de enero de 2022, 18 de febrero de 2022, 28 de abril de 2022, 26 de agosto de 2022, y 17 de octubre de 2022.

49. En cuanto al **cuarto requisito**, esta Corte concluye que, –en razón de que el accionante no solicitó al juez ejecutor la remisión del expediente y el informe a esta Corte Constitucional y, tampoco existe registro de que el juez de la Unidad Judicial se haya negado de forma expresa o tácita a remitirlo– el accionante incumplió con el requisito establecido en el artículo 164.3 de la LOGJCC.
50. Por lo indicado, esta Corte Constitucional verifica que el accionante, en su demanda, no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 164.2 y 164.3 de la LOGJCC. Por ello, este Organismo se ve impedido de asumir la competencia de ejecutar la sentencia, y, en consecuencia, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

6. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Desestimar la acción de incumplimiento **131-24-IS**.
2. En consecuencia, se dispone notificar esta sentencia, archivar la causa y devolver el proceso, conforme fue remitido a esta Corte.



Firmado electrónicamente por:
**JHOEL MARLIN
ESCUDERO SOLIZ**

Validar únicamente con FirmaEC

Jhoel Escudero Soliz
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, en sesión jurisdiccional extraordinaria de viernes 28 de noviembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente

Aída García Berni

SECRETARIA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI

13124IS-879af

**Caso Nro. 131-24-IS**

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en la sesión respectiva.- **Lo certifico.-**

Documento firmado electrónicamente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Sentencia 1-23-IS/25
Juez ponente: José Luis Terán Suárez

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2025

CASO 1-23-IS

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA 1-23-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional desestima una acción de incumplimiento presentada de oficio ante este Organismo por parte de la jueza ejecutora de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por cuanto la jueza no justificó en su informe, de forma motivada, la imposibilidad de ejecutar la sentencia.

1. Antecedentes

1.1 El proceso de origen

1. El 1 de octubre de 2021, Shirley Nathalia Escalante Burgos (“**accionante**”) presentó una acción de protección en contra de la Asamblea Nacional del Ecuador (“**Asamblea**”) y de la Procuraduría General del Estado. En su demanda, aludió que la culminación de su contrato de servicios ocasionales vulneró sus derechos a la no discriminación, a la seguridad jurídica y al trabajo. La causa se identificó con el número 17203-2021-05245.¹
2. Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021, la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del

¹ La accionante manifestó que ella trabajaba en la Asamblea Nacional mediante contrato ocasional en calidad de servidor legislativo 4, y fue registrada como trabajadora sustituta directa por estar a cargo de su hermano, quien tiene discapacidad grave de lenguaje del 76%. Tras unos contratiempos con la hija de la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Esperanza Guadalupe Llori Abarca, fue notificada con el memorando No. AN-AG-TH-2021-2975-M, con el cual se da terminación a su contrato, con la motivación de que “en atención al pedido de su jefe inmediato, le notifico que su Contrato de Servicios Ocasionales con la Asamblea Ncional (sic), culmina el 31 de agosto de 2021”. La accionante alegó que por su calidad de trabajadora sustituta “debería haber tenido garantizada la estabilidad laboral”.

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha (“**Unidad Judicial**”) aceptó la acción.² Inconforme con la decisión, la Asamblea interpuso recurso de apelación.³

3. En sentencia del 20 de abril de 2022, la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de la Unidad Judicial.⁴
4. El 7 de abril de 2022, la accionante presentó un escrito solicitando que se remita el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, a fin de ejecutar la sentencia, en relación al cálculo del monto a obtener como reparación económica.⁵

1.2 Fase de ejecución

5. El 3 de junio de 2022, la accionante presentó un escrito, ante la Unidad Judicial, solicitando que se sienta razón respecto de si existe la constancia de que la Asamblea y la Procuraduría han dado cumplimiento a la sentencia de 9 de diciembre de 2021.
6. Mediante auto de 9 de junio de 2022, la Unidad Judicial ofició a la Asamblea Nacional del Ecuador y a la Procuraduría General del Estado, a fin de que informen el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia.
7. El 15 de junio de 2022, la Asamblea presentó un escrito ante la Unidad Judicial, manifestando que “si se ha dado cumplimiento [a] lo dispuesto en sentencia de fecha 09 de diciembre de 2022”. Indicó que en la sentencia se dispuso que se reintegre a la accionante “respetando las cláusulas contenidas en el contrato”. Sin embargo, dicho “instrumento feneció el 31 de diciembre de 2021”, por lo que, a criterio de la Asamblea “se respetó (*sic*) las cláusulas contenidas en el contrato de servicios ocasionales”.
8. El 13 de julio y el 25 de julio de 2022, la accionante presentó escritos solicitando que se sienta razón del incumplimiento de la sentencia del 9 de diciembre de 2021, misma que se encuentra en firme. Asimismo, solicitó la destitución del cargo de los servidores públicos de la Asamblea Nacional que han incumplido dicha sentencia.

² La jueza de la Unidad Judicial, en lo principal, concluyó la existencia de la vulneración a derechos constitucionales, por lo cual aceptó la acción de protección. Dispuso: i) reintegrar a la accionante al puesto que estaba desempeñando en la Asamblea Nacional, ii) el pago de las remuneraciones mensuales dejadas de percibir, más los beneficios legales y sociales que le correspondan, y iii) disculpas públicas.

³ El recurso de apelación se interpuso de manera oral en audiencia pública. Sobre la sentencia, la Asamblea interpuso un recurso de aclaración y ampliación, mismo que fue negado en auto de 31 de octubre de 2022.

⁴ La Sala arguyó que sí se vulneraron los derechos a la no discriminación, a la seguridad jurídica y al trabajo.

⁵ La Unidad Judicial indicó que “mal podría esta actuaria remitir el escrito antes referido al despacho de la señora jueza por cuanto el expediente original ha sido remitido al superior [Corte Provincial] en donde se ha radicado la competencia en la actualidad”. Consecuentemente, se evidencia que no se aceptó el pedido.

9. El 29 de julio de 2022, la Unidad Judicial ofició al presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, “a fin de establecer la responsabilidad de los funcionarios de Talento Humano, los mismos que han omitido lo dispuesto por esta autoridad mediante sentencia de fecha 09 de diciembre de 2021”.
10. El 27 de septiembre de 2022, la jueza de la Unidad Judicial, Nancy Altamirano (“**jueza ejecutora**”) dispuso que se remita el proceso a la Fiscalía General del Estado para que investigue el incumplimiento de la sentencia. Además, ordenó la remisión del proceso original a la Corte Constitucional.
11. El 7 de junio de 2024, la accionante presentó una demanda de ejecución por reparación económica ante el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. El juicio subjetivo se signó con el número 17811-2024-01276.⁶

1.3 Trámite ante la Corte Constitucional

12. El 16 de diciembre de 2022, a través del oficio número 0468-2022-UJETFMNACQ, la jueza ejecutora de la Unidad Judicial inició de oficio una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. El 4 de enero de 2023, remitió a este Organismo el expediente en cuestión, junto con su respectivo informe.
13. Mediante sorteo electrónico efectuado el 4 de enero de 2023, la causa fue signada con el número 1-23-IS y su conocimiento le correspondió al entonces juez constitucional Enrique Herrería Bonnet. Sin embargo, en el marco de la renovación parcial de la Corte Constitucional, fueron posesionados la jueza Claudia Salgado Levy y los jueces Jorge Benavides Ordoñez y José Luis Terán Suárez. Consecuentemente, el 18 de marzo de 2025, la causa fue resorteada y le correspondió al juez constitucional José Luis Terán Suárez su conocimiento (“**juez sustanciador**”).
14. El 15 de septiembre de 2025, el juez ponente avocó conocimiento de la causa y dispuso que Shirley Nathalia Escalante Burgos, la Asamblea Nacional y la jueza ejecutora de la Unidad Judicial se pronuncien sobre el presunto incumplimiento de la sentencia.

2. Competencia

⁶ El juicio subjetivo se presentó con el objetivo de que la autoridad competente disponga la cuantificación de la reparación económica que debe asumir la Asamblea por la vulneración de derechos de la señora Escalante Burgos Shirley Nathalia, en los términos de la sentencia de acción de protección en la que se aceptaba el recurso. La cuantía la fijó en USD 11.728,00. En el presente juicio todavía no existe una sentencia, pues continúan las diligencias procesales.

15. De conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 436 de la Constitución de la República del Ecuador (“CRE”) en concordancia con los artículos 162 al 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (“LOGJCC”), la Corte Constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales.

3. Decisión cuyo cumplimiento se discute

16. La jueza ejecutora manifiesta el incumplimiento de la sentencia del 9 de diciembre de 2021, emitida por la Unidad Judicial. Dicha sentencia ordenó lo siguiente:

Como REPARACION INTEGRAL esta autoridad DISPONE:

- 1) Reintegrar a la señora Escalante Burgos Shirley Nathalia, al puesto que venía desempeñando, esto es, en calidad de Servidor legislativo 4 en la Asamblea Nacional, respetando las cláusulas contenidas en el contrato ocasional;
- 2) Como medida de reparación económica, dispongo el pago de las remuneraciones mensuales dejadas de percibir, más los beneficios legales y sociales que le correspondan, en el (sic) los que deberá considerarse los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el momento en que se produjo la separación de su cargo, hasta el momento de su efectiva reincorporación al mismo; atendiendo lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la determinación del monto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa;
- 3) La Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, expresará las debidas disculpas públicas a la señora Escalante Burgos Shirley Nathalia, por las violaciones de los derechos constitucionales a los que se refiere esta sentencia, con la finalidad de garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir, las que se publicarán en la página de su portal web institucional por 15 días.

4. Argumentos de las partes procesales

4.1. Argumentos de la accionante

17. La accionante del proceso de origen, mediante escritos presentados el 13 de julio y el 25 de julio de 2022, informó, en lo principal, que la Asamblea Nacional no ha dado cumplimiento de la sentencia, es decir, no se la ha reintegrado a la Institución, no se ha cumplido la reparación económica, y no se han ofrecido las disculpas públicas.
18. En consecuencia, solicitó que se “siente razón de incumplimiento de la sentencia del 09/12/2012, 10:28, misma que se encuentra en firme, luego de lo cual, se ordene la destitución del cargo de los servidores públicos de la Asamblea Nacional que han incumplido dicha sentencia” (se omitió el énfasis del original).

19. El 15 de septiembre de 2025, el juez ponente dispuso que la accionante se pronuncie respecto del incumplimiento; sin embargo, no hubo respuesta de la parte.

4.2. Argumentos de la jueza ejecutora

20. El 16 de diciembre de 2022, a través del oficio número 0468-2022-UJETFMNACQ, la jueza ejecutora informó lo siguiente:

1. En atención al estado de la causa, una vez fenecido el término legal, sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en sentencia de fecha 09 de diciembre de 2021 [...] remítase copias certificadas del proceso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que proceda a investigar el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. [...] 3. Remítase en original el proceso a la Corte Constitucional de manera inmediata, y, conforme a derecho, [...] adjuntado el informe detallado emitido por esta autoridad de conformidad al Art. 21 de [la LOGJCC].

21. El 15 de septiembre de 2025, el juez ponente dispuso que la jueza ejecutora remita su informe indicando si persiste el incumplimiento de la sentencia. En su informe de descargo de 19 de septiembre de 2025, la jueza realizó una breve recapitulación de los antecedentes procesales, y a partir de ello, indica que “el incumplimiento señalado fue sistemático y reiterado, pese a las múltiples prevenciones legales y medidas oficiadas por la judicatura de origen”. Añadió que “se ha realizado todo lo que está a su alcance para que la entidad accionada cumpla la sentencia dictada el 9 de diciembre del 2021”.
22. Asimismo, comunicó que, según información contenida en el proceso signado con el número 17811-2024-01276, del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se evidencia que la accionante “ha sido reintegrada a la Asamblea Nacional del Ecuador”.

4.3. Argumentos de la Asamblea Nacional

23. El 15 de septiembre de 2025, el juez ponente dispuso que la Asamblea se pronuncie; para el efecto, presentaron su informe de descargo el 18 de septiembre de 2025. Al respecto, la Asamblea indicó que ya se cumplió la sentencia en los siguientes términos:
24. La primera medida de reparación, relativa al reintegro de la accionante al puesto de servidor legislativo 4 en la Asamblea Nacional, se cumplió mediante el memorando número *AN-AG-2022-1464-M* de 1 de septiembre de 2022, a través del cual se dispuso que “se dé inicio al proceso de vinculación de la señora Shirley Nathalia Escalante Burgos, a partir del 01 de septiembre de 2022”.

25. La segunda medida son las disculpas públicas a favor de la accionante, las que se debían publicar en el portal web institucional por 15 días. Al respecto, la Asamblea Nacional anexó el memorando *AN-AG-CGTH-2022-3724-M* de 24 de octubre de 2022, en el cual se indica que las disculpas públicas se publicaron desde el 30 de septiembre de 2022 hasta la fecha de emisión del memorando.
26. En la tercera medida se dispuso el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, más los beneficios legales y sociales que correspondan. Al respecto, la Asamblea indica que, dentro del proceso signado con el número *17811-2024-01276*, el 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha solicitó la documentación pertinente para la elaboración del peritaje, misma que ya fue remitida por la Asamblea para que se continúe con el proceso de reparación económica a favor de la accionante.
27. En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Asamblea afirma que se “ha cumplido [con todas] las obligaciones a su cargo, quedando pendiente la ejecución del pago de la reparación económica a través del órgano jurisdiccional competente”.

5. Cuestión previa

28. El artículo 163 de la LOGJCC indica que los “jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional”.⁷ Así, se establece el carácter excepcional de la acción de incumplimiento porque impone a los jueces de instancia la obligación de actuar como garantes del cumplimiento de las sentencias emitidas en garantías jurisdiccionales, para lo cual, pueden adoptar los medios adecuados y pertinentes para ejecutar el fallo.⁸
29. El numeral 1 del artículo 96 de la Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional (“CRSPCCC”) establece que:

En garantías jurisdiccionales de conocimiento de jueces de instancia y cortes de apelación, en el caso de que el juez de instancia no pudiese hacer ejecutar su propia resolución, sentencia y/o acuerdo reparatorio dentro de un plazo razonable, de oficio o a petición de parte, remitirá a la Corte Constitucional el expediente constitucional junto con un informe debidamente argumentado respecto a los impedimentos presentados, circunstancia que dará inicio a la acción de incumplimiento.

⁷ En la sentencia 56-18-IS/22, sobre la base de la sentencia 103-21-IS/22, esta Corte estableció que “las causas de acción de incumplimiento pendientes de resolución requieren una verificación de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 163 y 164 de la LOGJCC”.

⁸ CCE, sentencias 131-22-IS/24, 11 de enero, 2024, párr. 26; 106-22-IS/24, 21 de marzo, 2024, párr. 25.

30. De la norma citada en el párrafo anterior se desprende que la acción de incumplimiento de sentencias puede ser presentada de oficio cuando el juez de instancia no pudiere hacer ejecutar la sentencia.⁹ Para el efecto, la o el juez ejecutor debe presentar un informe debidamente motivado, en el cual indique los impedimentos existentes para el cumplimiento de la decisión constitucional.¹⁰
31. Frente al carácter excepcional que posee la acción de incumplimiento, si el juez ejecutor considera que el caso amerita la intervención de la Corte Constitucional a través de la acción de incumplimiento, debe cumplir dos requisitos: (i) que remita un informe argumentando la imposibilidad de la ejecución de la sentencia; y, (ii) que la sentencia no haya sido cumplida integralmente en un plazo razonable.¹¹ Ambos requisitos deben ser cumplidos a cabalidad; en caso de que uno de ellos se incumpliére, esta Magistratura no está obligada a proseguir con el examen de fondo de la causa.¹²
32. Sobre el primer requisito, en línea con lo señalado previamente, el informe de la jueza ejecutora debe indicar los impedimentos presentados para el cumplimiento de la decisión constitucional. Este informe busca resguardar la naturaleza subsidiaria de esta acción, pues la excepcionalidad solo se justifica cuando el juez ejecutor señala con claridad los impedimentos a la ejecución oportuna de la sentencia.¹³
33. En el caso concreto, el informe correspondiente se compone de cuatro incisos. En la primera se identifican a las partes procesales y el número de proceso. La segunda, hace un recuento de las actuaciones procesales que se han llevado a cabo desde que se emitió la sentencia hasta antes de la presentación de la acción de incumplimiento. En un tercer considerando se cita el decisorio de la sentencia de primera instancia.
34. En el cuarto momento, se exponen las consideraciones para remitir el caso a la Corte, mismas que se conforman de tres disposiciones. En el primer punto se indica que, por cuanto ha fenecido el término legal para el cumplimiento de la sentencia, se remita el proceso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se proceda con la investigación del presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En el segundo punto se hace alusión a que la accionante obtenga copias del proceso, a su

⁹ Es necesario recordar que los jueces de instancia cuentan con varias facultades encaminadas al cumplimiento de su decisión constitucional, por lo que, únicamente cuando los medios empleados no hayan sido eficaces, pueden proponer una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Por ello, este Organismo también evalúa la actuación de la autoridad judicial como ejecutor natural de la decisión e incluso ha advertido que en caso de incumplimiento del artículo 21 de la LOGJCC, se podría configurar una infracción disciplinaria.

¹⁰ CCE, sentencias 131-22-IS/24, 11 de enero, 2024, párr. 28; 106-22-IS/24, 21 de marzo, 2024, párr. 27.

¹¹ CCE, sentencias 224-22-IS/24, 24 de enero, 2024, párr. 13; 106-22-IS/24, 21 de marzo, 2024, párr. 29.

¹² CCE, sentencias 131-22-IS/24, 11 de enero, 2024, párr. 30; 106-22-IS/24, 21 de marzo, 2024, párr. 29.

¹³ CCE, sentencia 224-22-IS/24, 24 de enero de 2024, párr. 16.

costa. En el tercer considerando se indica expresamente que se remita el proceso a la Corte Constitucional de manera inmediata. Para el efecto, se los cita a continuación:

1) En atención al estado de la causa, una vez fenecido el término legal, sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 09 de diciembre de 2021, a las 10h28, la misma que fue conformada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en sentencia de 20 de abril del 2022, a las 14h45, al tenor del Art. 83 numeral uno de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal, remítase copias certificadas del proceso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que proceda a investigar el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, incumplimiento de la Sentencia emitida dentro de la presente causa de fecha 09 de diciembre de 2021, a las 10h28 [...];

3) Por secretaría remítase en original el proceso a la Corte Constitucional de manera inmediata, y, conforme a derecho, de conformidad con el Art. 163 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, para que la legitimada activa haga valer sus derechos constitucionales, adjuntado el informe detallado emitido por esta autoridad de conformidad al Art. 21 de [la LOGJCC].

35. En consecuencia, resulta claro para esta Corte que el informe de la jueza ejecutora no justifica de forma alguna los impedimentos o las razones por las cuales le es imposible garantizar el cumplimiento de su sentencia. Por el contrario, la jueza ejecutora se limita a indicar que feneció el tiempo para el cumplimiento de la sentencia, sin explicar por qué aquello sería un impedimento para que la misma pueda ejecutarlo, y, en consecuencia, lo remita a esta Corte. Por lo tanto, se constata el incumplimiento de lo señalado en el párrafo 24 de esta sentencia.
36. Al respecto, esta Corte considera necesario recordar que “[d]e ninguna manera se puede considerar que el requerir a la parte obligada el cumplimiento de una decisión y que informe sobre dicho cumplimiento o justifique las razones de su inobservancia, constituya una adopción de todas las medidas a su alcance”.¹⁴ Para el efecto, los jueces constitucionales están obligados a ejecutar lo juzgado y, para ello, el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla múltiples potestades, a través de las cuales los jueces ejecutores pueden adoptar medidas de seguimiento, coerción y corrección, o aplicar sus atribuciones modulativas .
37. Como **(i) medidas de seguimiento**, los jueces ejecutores pueden disponer diligencias encaminadas a la ejecución, insistencias mediante providencias o realizar visitas *in situ*. También pueden delegar el seguimiento a la Defensoría del Pueblo u otras instancias de protección de derechos, quienes pueden realizar visitas, reportes, insistencias e informar de manera periódica de sus diligencias. Como **(ii) medidas de**

¹⁴ CCE, sentencias 65-21-IS/23, 9 de noviembre 2023, párr. 33; y 116-22-IS/24, 4 de abril 2024, párr. 79.

coerción y corrección, los jueces tienen la facultad de imponer sanciones económicas, por ejemplo, multas compulsivas y progresivas diarias. Inclusive, tienen la potestad de requerir la intervención de la Policía Nacional, de ser meritorio y verificarse su procedencia bajo el carácter de proporcionalidad y necesidad, al igual que remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado, si la resistencia a una orden judicial encajare en una infracción penal.¹⁵ Además, poseen **(iii) atribuciones modulativas**, es decir, pueden evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; y, de ser necesario, podrán modificar las mismas.¹⁶

38. Además, cabe precisar que, de conformidad con lo establecido en la sentencia 214- 22-IS/23 de esta Corte, los requisitos de procedencia de la acción de incumplimiento no son subsanables,¹⁷ de forma que el constatar la falta de cumplimiento, de aunque sea uno de ellos, conlleva la desestimación de la demanda. Asimismo, al no cumplirse con el primer requisito, no resulta necesario analizar el segundo requisito enunciado, relativo al cumplimiento de la sentencia en un plazo razonable.
39. Por tanto, esta Corte concluye que la acción que nos ocupa no cumple con el primer requisito para ser presentada de oficio; es decir, el justificar en el informe motivado los impedimentos existentes para el cumplimiento de la decisión constitucional. Por ende, esta Magistratura se ve impedida de pronunciarse sobre el fondo de la causa.

6. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Desestimar la acción de incumplimiento **1-23-IS**.
2. En consecuencia, se dispone notificar esta sentencia, archivar la causa y devolver el proceso, conforme fue remitido a esta Corte.



Firmado electrónicamente por:
**JHOEL MARLIN
ESCUDERO SOLIZ**
Validar únicamente con FirmaEC

Jhoel Escudero Soliz
PRESIDENTE

¹⁵ CCE, sentencias 116-22-IS/24, 4 de abril de 2024, párr. 79; 38-19-IS/22, 30 de noviembre de 2022, acápite 4.1.; 65-18-IS/23, 19 de julio de 2023, párr. 56; y, 65-21-IS/23, 9 de noviembre de 2023, párr. 35.

¹⁶ LOGJCC, artículo 21. Ver también, CCE, sentencias 24-19-IS/23, 1 de marzo de 2023, párr. 65; 65-18-IS/23, 19 de julio de 2023, párr. 56; y, 101-21-IS/24, 13 de marzo de 2024, párr. 50.

¹⁷ CCE, sentencia 214-22-IS/23, 15 de diciembre de 2023, párr. 12.

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, en sesión jurisdiccional extraordinaria de viernes 28 de noviembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente
Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Caso Nro. 1-23-IS

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en la sesión respectiva.- **Lo certifico.-**

Documento firmado electrónicamente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Sentencia 62-24-IS/25
Juez ponente: José Luis Terán Suárez

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2025

CASO 62-24-IS

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA 62-24-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional analiza la acción de incumplimiento presentada de forma directa ante este Organismo por Maruja Daysi Triviño Rendón, en la que solicitó el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. La Corte desestima la acción, debido a que la decisión cuyo cumplimiento se requiere, no es susceptible de acción de incumplimiento.

1. Antecedentes procesales

1.1 El proceso de origen

1. El 26 de abril de 2018, Maruja Daysi Triviño Rendón, presentó una acción subjetiva en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Balzar (**“GAD de Balzar”**) y de la Procuraduría General del Estado (**“PGE”**), proceso signado con el número 09802-2018-00385¹ y sometido a conocimiento y resolución del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
2. El 5 de agosto de 2019, el Tribunal Distrital dictó sentencia en la cual aceptó la demanda y declaró la nulidad de la resolución impugnada, emitida por el alcalde del GAD de Balzar,² inconforme con la decisión el GAD de Balzar interpuso recurso extraordinario de casación, que fue inadmitido por la conjueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en auto de 14 de marzo de 2022.

¹ La accionante impugnó la resolución GADMB-A-CG-2018-001-18-R, de 31 de enero de 2018, acto administrativo mediante el cual se le destituyó de su cargo.

² El Tribunal Distrital, como consecuencia de su declaratoria de nulidad, dispuso “[e]l inmediato reintegro de la accionante a su puesto o a otro similar de igualdad jerárquica y remuneración. [...] las cosas deben restituirse al estado en que se encontraban antes de que se produzca la nulidad y por ende, la accionante tiene derecho al pago de las remuneraciones que dejó de percibir más los intereses, como consecuencia de la destitución hasta el día en que sea efectivamente reintegrada, valores que serán calculados pericialmente, sin perjuicio de que sean remitido [sic] por la institución demandada; el pago se efectuará dentro de un término de sesenta días desde que esa sentencia se ejecutorie, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Servicio Público. [...]”

1.2 Fase de ejecución

3. El 27 de abril de 2023, el Tribunal Distrital concedió el término de cinco días al GAD de Balzar para que reintegre a la accionante a su puesto de trabajo o a otro similar de igual jerarquía y remuneración, conforme a lo dispuesto en la sentencia de 5 de agosto de 2019.
4. El 22 de mayo de 2023, el Tribunal Distrital señaló que la accionante ha puesto en su conocimiento que mediante memorando GADMCB-JIPV-DTHCI-2023-151-M, suscrito por el director de Talento Humano del GAD de Balzar, se ha cumplido con el reintegro a su puesto de trabajo, con lo que se ha dado parcial cumplimiento de la sentencia; y, dispuso al GAD de Balzar que en el término de cinco días “remita una liquidación de los valores a pagar a la accionante por concepto de las remuneraciones que dejó de recibir más los intereses, como consecuencia de la destitución hasta el día en que fue reintegrada”, sin que el GAD de Balzar haya atendido lo requerido.
5. El 27 de junio de 2023, el Tribunal Distrital, atendió las solicitudes de la accionante y previo sorteo designó perito con especialidad en contabilidad y auditoría para que elabore un informe ciñéndose a lo ordenado en la sentencia, la perito fue posesionada el 4 de julio de 2023.
6. El 6 de julio de 2023, la perito remitió su informe, mismo que fue incorporado al expediente y cuyo traslado se dispuso en auto de 20 de julio de 2023.
7. El 17 de agosto de 2023, el Tribunal Distrital aprobó el informe pericial, previo a disponer el mandamiento de ejecución.
8. El 31 de agosto de 2023, el Tribunal Distrital dictó el mandamiento de ejecución y dispuso su cumplimiento al GAD de Balzar en el término de 5 días, bajo prevenciones de ley.

1.3 Procedimiento ante la Corte Constitucional

9. El 6 de mayo de 2024, Maruja Daysi Triviño Rendón (**“accionante”**), presentó una acción de incumplimiento directamente ante este Organismo, por el presunto incumplimiento de la sentencia dictada el 5 de agosto de 2019 y del auto de mandamiento de ejecución dictado el 31 de agosto de 2023 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
10. En escritos de 28 de mayo de 2025, 05 y 19 de junio de 2025 y, el 04 de julio de 2025, la accionante recordó los párrafos 56 a 60 de la sentencia 32-18-IN/24 sobre el artículo

170 del Código de Planificación y Finanzas Públicas para sostener que “es evidente que la Entidad accionada NO PRIORIZÓ EL PAGO PENDIENTE EN FAVOR DE LA SUSCRITA, DE LAS ASINACIONES PRESUPUESTARIAS que recibe y/o de ser necesario realizando las reformas respectivas en el gasto no permanente”.

11. El 6 de mayo de 2024, se realizó el sorteo de la causa y su sustanciación le correspondió, a la ex jueza constitucional, Daniela Salazar Marín.
12. El 13 de marzo de 2025, en el marco de la renovación parcial de la Corte Constitucional, fueron posesionados la jueza Claudia Salgado Levy y los jueces Jorge Benavides Ordóñez y José Luis Terán Suárez.
13. En resorteo de 18 de marzo de 2025, el conocimiento de la causa le correspondió al juez José Luis Terán Suárez.
14. El 6 de octubre de 2025, el juez José Luis Terán Suárez avocó conocimiento de la causa, requirió a la accionante que informe si persistía o no el incumplimiento de la sentencia³ y dispuso al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, la remisión de su informe sobre el cumplimiento de su decisión jurisdiccional.⁴

2. Competencia

15. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones de incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales de conformidad con el artículo 436 numeral 9 de la Constitución y los artículos 162 al 165 de la LOGJCC.

3. Decisiones judiciales cuyo cumplimiento se solicita

16. La sentencia de 5 de agosto de 2019, emitida por el Tribunal Distrital dispuso:

[...] ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, acepta la demanda planteada por MARUJA DAYSI TRIVIÑO RENDÓN y se declara la nulidad de la Resolución dictada N° GADMB-A-CG-2018-001-18-R del 31 de enero del 2018 emitido por el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Balzar; en consecuencia, se dispone el inmediato reintegro de la accionante a su puesto o a otro similar de igual jerarquía y remuneración. Dada la declaratoria de nulidad, las cosas deben restituirse al estado en el que se encontraban antes de que se produzca la nulidad y por ende, la accionante tiene derecho al pago de las

³ La accionante atendió el requerimiento mediante escrito de 6 de octubre de 2025.

⁴ El Tribunal Distrital atendió la disposición y remitió su informe el 13 de octubre de 2025.

remuneraciones que dejó de recibir más los intereses, como consecuencia de la destitución hasta el día en que sea efectivamente reintegrada, valores que serán calculados pericialmente, sin perjuicio de que sean remitido (sic) por la institución demandada; el pago se efectuará dentro de un término de sesenta días desde que esta sentencia se ejecutorie, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Sin costas ni honorarios que fijar. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

17. El mandamiento de ejecución de 31 de agosto de 2023, emitido por el Tribunal Distrital dispuso:

[...] Continuando con el trámite de ejecución, de conformidad con el Art. 372 del Código Orgánico General de Proceso, se dicta MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN y se ordena: 1). - Que el accionado GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR, pague a TRIVIÑO RENDON MARUJA DAYSI, la suma de USD. \$ 73.806,87 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), desglosados de la siguiente manera: por concepto de Sueldo USD. \$ 50.346,67; Décima Tercera Remuneración USD. \$ 4.195,56; Décima cuarta remuneración USD. \$ 2.120,69; Fondos de Reserva USD. \$ 4.193,88; Vacaciones USD. \$ 4.195,56; Intereses legales USD. \$ 14.519,20; de los cuales se ha descontado el valor que corresponde al rubro de Aporte Individual IESS (11,45%) 2). - Que la entidad accionada GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR cumpla con la obligación determinada en este mandamiento de ejecución en el término de cinco 5 días bajo prevenciones de Ley. Dentro del mismo término, la entidad accionada deberá cancelar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el aporte individual USD \$ 5.764,69. 3). - La parte accionante, quien solicitó la pericia deberá cancelar los honorarios fijados al perito técnico CPA. Katherine Palma Anchundia, esto es, \$ 336,00. Se conmina al perito, cumpla con la obligación prevista en el Art. 23 numeral 6 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, esto es, presente copia certificada de la factura de honorarios emitida por su persona, por el trabajo pericial que ha realizado. [...]

4. Alegaciones de las partes

4.1 De la accionante

18. La accionante en su acción de incumplimiento ha señalado que:

[...] El 05 de agosto del año 2019 [...] se emite sentencia que declaró con lugar mi demanda contenciosa dirigida en contra del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BALZAR, declarando la nulidad del acto de destitución, disponiendo mi restitución inmediata al cargo de funcionaria del GAD de Balzar el (sic) pago de las remuneraciones que dejé de percibir durante la destitución. [...] **Mediante mandamiento de ejecución de fecha 31 de agosto del año 2023** las 11h44 el Tribunal Distrital [...] dispuso que la Entidad accionada el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BALZAR debidamente representada por el señor Alcalde y Procurador Síndico Municipal, **dentro del término de cinco días**, paguen en mi favor la suma de \$73,806,87, sin embargo hasta la presente fecha la Entidad accionada no me ha cancelado, pese los (sic) reiteradas insistencias (ordenes) judiciales efectuadas por el Tribunal exigiendo el cumplimiento de la orden judicial de pago.

19. Pese haber sido notificado con auto de 6 de octubre de 2025, conforme se desprende del párrafo 13 de esta sentencia, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, no remitió el informe requerido por esta Corte Constitucional.

5. Cuestión previa

20. El artículo 436.9 de la Constitución establece que una de las atribuciones de la Corte Constitucional es “conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”. De igual manera, el primer inciso del artículo 163 de la LOGJCC indica que “[l]as juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional”.
21. En el presente caso, la decisión objeto de esta acción de incumplimiento proviene de un proceso contencioso administrativo propuesto por la accionante. Al respecto, la accionante indica que no se ha dado cumplimiento a lo dictado en la sentencia emitida el 5 de agosto de 2019 por el Tribunal Distrital; así como tampoco, al auto de mandamiento de ejecución dictado el 31 de agosto de 2023.
22. En este sentido, las decisiones alegadas por la accionante, tal como esta Corte ha establecido “[...] se encuentran en etapa de ejecución y no provienen de una de las garantías constitucionales reconocidas en la Constitución, ni en la LOGJCC, esta Corte constata que la misma no puede ser objeto de verificación a través de una acción de incumplimiento”.⁵
23. De igual manera, este Organismo ha reiterado que pronunciarse respecto al incumplimiento de decisiones que no son objeto de la presente acción constituiría una desnaturalización de la acción de incumplimiento.⁶ Por lo tanto, al verificarse que la presente acción ha sido planteada respecto de una decisión que no es objeto de la garantía jurisdiccional de acción de incumplimiento de sentencia constitucional, no le corresponde a esta Corte emitir pronunciamiento alguno respecto al presunto incumplimiento, pues ello debe tramitarse en la vía ordinaria, a través de los mecanismos existentes para el efecto.

⁵ CCE, sentencias 28-19-IS/22, 31 de agosto de 2022, párr. 23; y 73-20-IS/21, 27 de octubre de 2021, párr. 26.

⁶ *Ibidem*

6. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Desestimar por improcedente la acción de incumplimiento 62-24-IS.
2. Devolver el expediente al juzgado de origen.
3. Notifíquese y archívese.



Jhoel Escudero Soliz
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, en sesión jurisdiccional extraordinaria de viernes 28 de noviembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente
Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI

6224IS-879b2



Caso Nro. 62-24-IS

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en la sesión respectiva.- **Lo certifico.-**

Documento firmado electrónicamente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Sentencia 159-24-IS/25
Juez ponente: José Luis Terán Suárez

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2025

CASO 159-24-IS

**EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
 EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
 LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE**

SENTENCIA 159-24-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional desestima la acción de incumplimiento presentada respecto de la sentencia 26-18-IN/20 y acumulados, al evidenciar que no existen obligaciones exigibles que puedan solicitarse mediante esta garantía. La acción de incumplimiento de sentencias no cabe para exigir, en abstracto, el cumplimiento de declaratorias de constitucionalidad o inconstitucionalidad en las que no exista expresamente un mandato directo de hacer o no hacer verificable por este organismo.

1. Antecedentes procesales

1. El 5 de noviembre de 2024, Rosa Aida Paz Pacheco (“**accionante**”) presentó ante esta Corte una acción de incumplimiento en contra del Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas y Adolescentes Infractores (“**SNAI**”). En su acción, la accionante solicitó el cumplimiento de la sentencia 26-18-IN/20 y acumulados emitida por este Organismo.¹
2. El 5 de noviembre del 2024, la causa se identificó con el número 159-24-IS y su conocimiento le correspondió a la entonces jueza Daniela Salazar Marín.
3. El 13 de marzo de 2025, en el marco de la renovación parcial de la Corte Constitucional, fueron posesionados la jueza Claudia Salgado Levy y los jueces Jorge Benavides Ordoñez y José Luis Terán Suárez. El 18 de marzo de 2025 la causa fue resorteada al juez José Luis Terán Suárez (“**juez ponente**”).

¹ En esta sentencia se resolvió cuatro demandas de acción pública de inconstitucionalidad presentadas en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. La Corte Constitucional declaró inconstitucional las frases “obligatorias” y “Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración”, del referido Decreto. Se debe apuntar que el mencionado Decreto regulaba la compra de renuncias con carácter obligatorio. Por otro lado, la accionante señaló que era funcionaria del SNAI por 18 años hasta el 30 de agosto de 2012 en la cual la desvincularon. Adicional a ello, si bien la accionante dice en el primer apartado que presenta acción por incumplimiento, de la revisión de la demanda se desprende que lo que presenta la accionante es una acción de incumplimiento.

4. El 30 de septiembre de 2025, el juez ponente avocó conocimiento de la causa y solicitó a la accionante y al SNAI, que, en el término de tres días, informen a este Organismo “si persiste el incumplimiento de la sentencia 26-18-IN/20 de 28 de octubre de 2020”.

2. Competencia

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 436.9 de la Constitución en concordancia con los artículos 162 al 165 de la LOGJCC, la Corte Constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales.

3. Decisión cuyo cumplimiento se exige

6. En su demanda, la accionante alega el incumplimiento de la sentencia 26-18-IN/20 y acumulados emitida por esta Corte, en la que se resolvió:

1. Aceptar parcialmente las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas dentro de los casos 26-18-IN, 23-19-IN, 30-19-IN y 7-20-IN.

2. En ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución, en concordancia con los artículos 74 y 76 numerales 4, 5 y 6 de la LOGJCC, se declara:

En el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 489 de 12 de julio de 2011, la inconstitucionalidad de las frases “*obligatorias*” y “*Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración*”; por lo tanto, el artículo permanecerá vigente de la siguiente forma:

“Artículo 8.- A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado.

‘Artículo...- Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas.

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo.

En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición General Primera de la LOSEP.

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que hubiere lugar.

La compra de renunciaciones con indemnización no es aplicable para las y los servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.”

3. Esta sentencia produce efectos hacia el futuro conforme el artículo 95 de la LOGJCC, razón por la que no cubre situaciones que se hayan suscitado con anterioridad a su emisión. En virtud del artículo 96 numeral 1 de la LOGJCC, ninguna autoridad podrá aplicar el contenido de las frases declaradas inconstitucionales ni sus efectos en los términos en los que esta Corte se ha pronunciado. En consecuencia, a partir de la publicación de este fallo en el Registro Oficial, para el reingreso al sector público de los servidores y servidoras a quienes se les aplicó en su momento esta figura, no se podrá exigir el reintegro de los valores pagados como parte de la compra de la renuncia de manera obligatoria.

4. Argumentos de las partes procesales

4.1 Argumentos de la accionante y pretensión

7. Como antecedente, la accionante señala que “fue desvinculada en aplicación” al Decreto Ejecutivo 813” y que su firma para que proceda la desvinculación procedió en un contexto “abrupto”.
8. La accionante señala que la aplicación del Decreto Ejecutivo, vulneró su derecho al trabajo, pues se ha visto impedida de desempeñar un cargo público.
9. La accionante también señala que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica en virtud de que, en su decir, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813 modifica el artículo 81 de la LOSEP, debido a que la figura de la “compra de renuncia obligatoria” coloca, en la práctica, a todos los servidores públicos en una misma situación que aquellos de libre nombramiento y remoción, permitiendo su desvinculación en cualquier momento, a pesar de que el propio artículo 81 de la LOSEP señala que dicho régimen tiene un carácter excepcional.
10. Por otro lado, la accionante sostiene que se vulneró su derecho a la “estabilidad laboral”, pues fue separada de “manera inconstitucional” de su cargo que tuvo la calidad de “permanente”. La accionante agrega que se le “despojó” de su sustento económico, y, en ese sentido, “es claramente factible que se sirvan declarar la inconstitucional de la norma impugnada”.
11. Con estos antecedentes, la accionante solicita que se ordene al SNAI el pago de la jubilación y se cancele los valores que le corresponderían desde la fecha que fue desvinculada en el año 2012 hasta la presente fecha.

12. En el escrito de 2 de octubre de 2025, presentado por la accionante volvió a informar a este Organismo que persiste el “incumplimiento de la sentencia No. 26-18-IN/20, de 28 de octubre de 2020, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador”.

4.2 Argumentos del SNAI.

13. A pesar de haber sido notificado en legal y debida forma, el SNAI, no se ha pronunciado sobre el requerimiento efectuado por el juez ponente, según lo descrito en el párrafo 4 de la presente sentencia.

5. Cuestión previa

14. De conformidad con los artículos 163 y 164 de la LOGJCC, así como el artículo 96 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la ejecución de las sentencias y resoluciones constitucionales corresponde a los jueces constitucionales de primera instancia –juez ejecutor– que conocieron el proceso de origen. Solo de forma subsidiaria este Organismo puede asumir dicha competencia a través de una acción de incumplimiento.
15. En el caso en concreto, la accionante demandó el cumplimiento de la sentencia 26-18-IN/20 y acumulados de 28 de octubre de 2020 emitida por este Organismo. En ese contexto, se debe primero analizar si la decisión cuyo cumplimiento se exige, procede o no a través de esta garantía jurisdiccional.
16. La decisión objeto de esta acción corresponde a una sentencia de control abstracto de constitucionalidad en la cual esta Corte Constitucional **(a)** declaró la inconstitucionalidad de las frases “**obligatorias**” y “[l]as **servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración**”, constantes en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 489 de 12 de julio de 2011; y, por otro lado, **b)**, estableció:

Esta sentencia produce efectos hacia el futuro conforme el artículo 95 de la LOGJCC, razón por la que no cubre situaciones que se hayan suscitado con anterioridad a su emisión. En virtud del artículo 96 numeral 1 de la LOGJCC, ninguna autoridad podrá aplicar el contenido de las frases declaradas inconstitucionales ni sus efectos en los términos en los que esta Corte se ha pronunciado. En consecuencia, a partir de la publicación de este fallo en el Registro Oficial, para el reingreso al sector público de los servidores y servidoras a quienes se les aplicó en su momento esta figura, no se podrá exigir el reintegro de los valores pagados como parte de la compra de la renuncia de manera obligatoria.

17. En virtud de la naturaleza de la decisión objeto de esta acción y de sus efectos, resulta indispensable recordar que los fallos provenientes de una acción pública de inconstitucionalidad —i.e., aplicación del control abstracto de constitucionalidad— no deciden sobre situaciones concretas sino sobre la compatibilidad de una norma jurídica, de forma abstracta y general, con la Constitución. Por lo que, estas pueden ser objeto de acción de incumplimiento solo cuando incluyan disposiciones con obligaciones concretas de hacer o no hacer, expresas, directas y exigibles, dirigidas a **un sujeto determinado**, que se agoten con su ejecución y sean verificables por este Organismo.²
18. Así mismo, de acuerdo con el art. 163 de la LOGJCC, el objetivo de la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales “es verificar el cumplimiento de lo dispuesto en aquellas, es decir, de sus decisiones (*decisum*), más no exigir la aplicación de criterios jurisprudenciales desarrollados en la motivación de esas sentencias y dictámenes [...] plantear una acción de incumplimiento de otras cuestiones ajenas al *decisum* de una sentencia implicaría realizar una nueva consideración de lo resuelto, lo que atentaría contra la institución de la cosa juzgada”.³
19. Esta Corte ha establecido que la acción de incumplimiento debe activarse específicamente para garantizar el cumplimiento de obligaciones concretas emitidas en decisiones provenientes de garantías jurisdiccionales y procesos constitucionales. Dichas obligaciones, además, deben contener un mandato específico de hacer o no hacer para sujetos específicos”.⁴
20. En la sentencia que se exige su cumplimiento no existe una obligación. En tal virtud, la sentencia 26-18-IN/20 y acumulados de 28 de octubre de 2020 escapa del objeto de esta garantía jurisdiccional activada.
21. Por otro lado, en el caso en concreto, la accionante pretende que el SNAI le cancele valores dejados de percibir desde su desvinculación en 2012 hasta la fecha. Es importante precisar que esta acción no puede ser utilizada con el fin de que este Organismo se pronuncie sobre supuestas vulneraciones de derechos cometidas por el SNAI, pues aquello es ajeno al objeto de esta garantía jurisdiccional y resulta, por tanto, improcedente.

² CCE, sentencia 155-22-IS/24, 22 de agosto de 2024, párr. 26.

³ CCE, sentencia 129- 25-IS, 08 de octubre de 2025, párr. 19.

⁴ CCE, sentencias 37-14-IS/20, 22 de julio de 2022, párrs. 17 y 22; 221-22-IS/24, 09 de mayo de 2024, párr. 25; 3-22-IS/24, 31 de enero de 2024, párr. 17.

6. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. **Desestimar** la acción de incumplimiento **159-24-IS**.
2. Notifíquese y archívese.



Firmado electrónicamente por:
**JHOEL MARLIN
ESCUDERO SOLIZ**
Validar únicamente con FirmaSC

Jhoel Escudero Soliz

PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, en sesión jurisdiccional extraordinaria de viernes 28 de noviembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente

Aída García Berni

SECRETARIA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI

15924IS-879b1



Caso Nro. 159-24-IS

RAZÓN.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en la sesión respectiva.- **Lo certifico.-**

Documento firmado electrónicamente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL



Firmado electrónicamente por:
AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI



Mgs. Jaqueline Vargas Camacho
DIRECTORA (E)

Quito:
Calle Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto
Atención ciudadana
Telf.: 3941-800
Ext.: 3134

www.registroficial.gob.ec

JV/PC

El Pleno de la Corte Constitucional mediante Resolución Administrativa No. 010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de la publicación virtual del Registro Oficial y sus productos, así como la eliminación de su publicación en sustrato papel, como un derecho de acceso gratuito de la información a la ciudadanía ecuatoriana.

"Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895"

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su publicación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.